



Acelerando la acción climática en América Latina

Mensajes de las sesiones del
Pabellón de EUROCLIMA+
en la COP26 de Glasgow

Serie de
Estudios Temáticos
EUROCLIMA+

22

compendio

Comisión Europea**Dirección General de Asociaciones Internacionales**

Rue de la Loi 41 – B-1049 Bruselas

Telefax: + 32 (0)2 299 64 07

Correo electrónico: europeaid-euroclima@ec.europa.eu / info@euroclimaplus.org

Internet

http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.html

Puede consultar el Estudio Temático en Internet en:

<http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/>

<http://euroclima.org/es>

Compendio

Acelerando la acción climática en América Latina

Mensajes de las sesiones del Pabellón de
EUROCLIMA+ en la COP26 de Glasgow

**Serie de Estudios Temáticos
EUROCLIMA+**

22



Financiado por
la Unión Europea

Créditos

La serie de Estudios Temáticos es financiada por la Unión Europea, en el marco del programa EUROCLIMA+ de la Comisión Europea. Los puntos de vista expresados en este estudio son de los autores y no reflejan necesariamente los de la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni las personas que la representan son responsables del uso que pueda hacerse de la información que se proporciona a continuación.

Redactores del Estudio Temático:

- » Mariana Castaño Cano
- » Laura Betancur Alarcón
- » Guillermo Dascal

Diseño:

Alexandra Cortes

Diagramación:

Francesc Vaquer Gregori

Fotografías:

EUROCLIMA+



Citación:

Comisión Europea, Dirección General de Asociaciones Internacionales. Castaño Cano, M., Betancur Alarcón, L., Dascal, G., *Acelerando la acción climática en América Latina. Mensajes de las sesiones del Pabellón de EUROCLIMA+ en la COP26 de Glasgow*, (Serie de Estudios Temáticos EUROCLIMA+ n.22), Programa EUROCLIMA+, Bruselas, 2022.

ES PDF ISBN: 978-92-76-53661-1 ISSN: 2363-2585 doi: 10.2841/145395 MN-AL-22-006-ES-N

© Unión Europea, 2022

Bruselas, Bélgica, 2022

Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

Índice de contenidos:

Siglas y Acrónimos	IV
Resumen	VI
Abstract	VII
Prólogo I: Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y Caribe en la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea	VIII
Prólogo II: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo a.i. de la CEPAL	X
1. Ambición para la mitigación y la adaptación	1
1.1 Estado de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y estrategias de largo plazo	1
1.2 Coordinación multinivel: instrumentos de lo local a lo internacional	5
1.3 Transición en el sector energético.....	7
1.4 Desarrollo, recuperación verde y salud pública	8
2. Finanzas del clima y rol del sector privado	15
2.1 Retos y oportunidades para la financiación climática	15
2.2 Alineación con el sector privado	18
2.3 Instrumentos de precios al carbono	20
3. Ciudades: epicentro de la innovación climática	27
3.1. De la planeación a la acción: cómo priorizar y financiar las acciones climáticas	27
3.2. En urbanismo como en salud, más vale planificar que curar	29
3.3. Aportando a la mitigación desde una gobernanza multinivel	29
3.4. Invertir en adaptación, salvaguardar el desarrollo	31
3.5. Transporte y movilidad: ciudades a la vanguardia de la acción	33

4. Biodiversidad y alimentación: soluciones basadas en la naturaleza	41
4.1 El potencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en América Latina	41
4.2 Integración de la biodiversidad en la acción climática	44
4.3 Movilizando finanzas para las SbN	46
4.4 Transformación de los sistemas agroalimentarios	47
5. Transición justa y participación	55
5.1 Empoderamiento y justicia climática	55
5.2 Mujeres, comunidades indígenas y rurales en las políticas públicas	56
5.3 Información, conocimiento y educación	61
5.4 Acciones desde los parlamentos	64
6. Impacto y legado de la colaboración UE-LAC en el camino a Glasgow	69
Conclusiones	73
Anexo I. Programa completo	75
Anexo II. En cifras: estadísticas del Pabellón EUROCLIMA+ en la COP26	78
Índice por países	79
Índice por instrumentos	80



Siglas y acrónimos

AbE	Adaptación Basada en Ecosistemas
ACE	Acción para el Empoderamiento Climático / Action for Climate Empowerment
AFOLU	Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo / Agriculture, Forestry and Other Land Use
AMPB	Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCAD	Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CDN	Contribuciones Determinadas a nivel Nacional / National Determined Contributions (NDC, por sus siglas en inglés)
CdP	Comunidad de Práctica
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CMNUCC	Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también referida como ONU Cambio Climático
COP	Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
CVTAS	Centro Virtual de Tiempo Atmosférico Severo
CREO Antofagasta	Forma abreviada de la organización “Yo CREO en Antofagasta”
DG CLIMA	Dirección General de Acción Climática de la Comisión Europea
DG DEVCO	Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea
DG REGION	Departamento de Política Regional y Urbana
EF	Expertise France
FIIAPP	Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
GEI	Gases de Efecto Invernadero
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ICCO	Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo
IISD	Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible / International Institute for Sustainable Development
IPPC	Panel Intergubernamental del Cambio Climático / Intergovernmental Panel on Climate Change
IUCN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza / International Union for Conservation of Nature
IURC	International Urban and Regional Cooperation Cambio Climático
LAC	América Latina y Caribe
LCBA	Low Carbon Business Action
LEDs	Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones / Low-Emission Development Strategy
LTS / LT-LEDs	Estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero / Long-term low greenhouse gas emission development strategies

LEDS LAC	Plataforma Regional en América Latina y el Caribe para avanzar en las LEDs en la región
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
OPCC	Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa
OPIAC	Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana
PIB	Producto Interior Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (también ONU Ambiente)
PPICC	Plataforma de los Pueblos indígenas para enfrentar el Cambio Climático
RIOCC	Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana
SBN	Soluciones Basadas en la Naturaleza
UE	Unión Europea
UNCCD	Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
UNDRR	Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres / United Nations Office for Disaster Risk Reduction
WRI	World Resources Institute

Resumen

Entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021, el Pabellón de EUROCLIMA+ en la COP26 de Glasgow volvió a ser la “Casa de América Latina” en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Habían pasado casi dos años desde la primera edición del Pabellón, en la COP25, una COP latinoamericana en Madrid bajo la presidencia de Chile que de forma inesperada y debido a la pandemia duró dos años en lugar de uno.

En la COP26, ministras y ministros, congresistas, alcaldes y alcaldesas, expertas y expertos, líderes de pueblos indígenas y comunidades locales, activistas y jóvenes de toda la región participaron en persona o virtualmente en los numerosos eventos del Pabellón, compartiendo experiencias de acción climática en la región.

En total, se celebraron 44 eventos, de los cuales 37 fueron híbridos y 7 totalmente en línea. 335 expertos y expertas participaron como oradores, en representación de unas 250 organizaciones de 42 países distintos, sobre todo de América Latina y el Caribe, pero también de Europa, Asia y África.

Aunque, por seguridad sanitaria, la capacidad de público en el pabellón era muy limitada, cientos de personas se conectaron en vivo a las sesiones y miles más las visualizaron con posterioridad.

Las sesiones e intercambios fueron extremadamente ricos y profundizaron en las cuestiones más pertinentes de la actualidad climática. Para este estudio, hemos vuelto a escuchar con atención a los intervinientes y hemos extraído análisis, recomendaciones y declaraciones sobre el estado de la acción climática en Latinoamérica. A continuación, se los resumimos en seis capítulos sobre (1) la ambición de los planes climáticos, (2) las finanzas del clima, (3) las ciudades como epicentro de la acción, (4) la biodiversidad y la alimentación, (5) la participación a todos los niveles y de todos los sectores sociales y (6) la centralidad de la colaboración climática para, juntos, poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

Cada capítulo concluye con una serie de mensajes clave a modo de resumen, así como una selección de algunos de los casos presentados en las sesiones. Por falta de espacio, el estudio no menciona ni a cada uno de los más de 300 intervinientes ni todos los múltiples ejemplos de experiencias exitosas expuestas.

Para invitarles a profundizar en los debates más allá de los límites de este estudio, cada vez que se cita a un/una especialista, se ofrece un enlace al [sitio web](#) donde podrá profundizar en los contenidos y volver a ver el video de la sesión.

Abstract

From 1 to 12 November 2021, the EUROCLIMA+ Pavilion at COP26 in Glasgow was once again the “House of Latin America” at the United Nations Climate Change Conference. Almost two years had passed since the first edition of the Pavilion, at COP25, a Latin American COP in Madrid under the presidency of Chile that unexpectedly due to the pandemic, lasted two years instead of one.

At COP26, ministers, congressmen and women, mayors, experts, indigenous peoples and local community leaders, activists and young people from across the region participated in person and virtually in the numerous Pavilion events to share experiences of climate action in the region.

In total, 44 events were held, of which 37 were hybrid and 7 were fully online. 335 experts participated as speakers, representing 250 organisations from 42 different countries, mainly from Latin America and the Caribbean but also from Europe, Asia and Africa.

Although, for health security reasons, the capacity of the pavilion was very limited, hundreds of people connected live to the sessions and thousands more watched them afterwards.

The sessions and exchanges were extremely rich and delved into the most pertinent climate issues. For this study, we have once again listened carefully to the speakers and extracted analyses, recommendations and statements on the state of climate action in Latin America. Below, we summarise them in six chapters, (1) the ambition of climate plans, (2) climate finance, (3) cities as the epicenter of action, (4) biodiversity and food, (5) participation at all levels and from all sectors of society, and (6) the centrality of climate collaboration to achieve the goals of the Paris Agreement.

Each chapter concludes with a series of key messages as well as a selection of some of the cases presented in the sessions. For lack of space, the study does not mention each of the more than 300 speakers nor all of the many examples of successful experiences presented.

In order to invite you to dive deeper into the discussions beyond the limits of this study, each time an expert is quoted, a link is provided to the Pavilion’s [website](#) where you can read more about the session and watch the video.



Prólogo I

Jolita Butkeviciene

Directora para América Latina y el Caribe
en la Dirección General de Cooperación y Desarrollo
de la Comisión Europea

Nuestro planeta, y particularmente América Latina y el Caribe, están enfrentando simultáneamente importantes desafíos que requieren de respuestas globales y articuladas. Al cambio climático y la pandemia COVID, se le suma ahora la guerra de Ucrania, cuyas consecuencias son ante todo humanas, pero también sociales y económicas, con sus impactos en la seguridad energética, alimentaria y climática. La necesidad urgente de generar sociedades resilientes nos urge a trabajar mas fuertemente hacia la descarbonización.

La guerra en Europa nos recuerda asimismo la importancia de trabajar por el hermanamiento entre los pueblos. Y son los principios y valores europeos de hermanamiento y cooperación por la paz, la seguridad y el bienestar de las personas y el planeta los que nos anima en nuestro trabajo cada día.

Cuando tuvo lugar la COP26 en Glasgow, desde la Unión Europea nos preocupamos por impulsar una mayor ambición, centrando nuestros esfuerzos en avanzar de las palabras a la acción. Elaboramos el Pacto Verde, propusimos procesos de recuperación verde postpandemia y promovimos alianzas con otros países que también quisieran ser carbono neutrales hacia 2050.

Tal como hicimos en la COP25 en Madrid, construimos el Pabellón de EUROCLIMA+ en Glasgow, con el respaldo institucional de CEPAL,

para montar una vez mas la “Casa de América Latina” en la COP26, como lugar de encuentro y dialogo entre representantes de países y organizaciones de la región y con los de la Unión Europea.

A pesar del reto que representaba la organización de una COP durante la pandemia, en el Pabellón se realizaron reuniones en persona con socios estratégicos para impulsar la colaboración mutua. Se organizaron 44 eventos paralelos con formato hibrido para favorecer la reflexión conjunta, con la presencia de una amplia y equilibrada participación tanto de los diferentes países como de diferentes tipos de organizaciones: desde gobiernos a bancos de desarrollo, desde agencias de cooperación a ONGs, desde empresas a organismos de investigación.

En total participaron 335 ponentes y 249 organizaciones de 42 países. Expusieron 40 ponentes de alto nivel, de ministros a parlamentarios, gobernadores y responsables de instituciones europeas y de las Naciones Unidas.

Cientos de visitantes acudieron en persona al Pabellón, mientras que más de doce mil han seguido los eventos en línea.

En la presente publicación, encontraran los debates que allí acontecieron, destacando los principales mensajes, las conclusiones y recomendaciones planteadas. Invitamos a los y las lectoras a

recorrer estas páginas que reflejan los intercambios que surgieron de los 44 eventos desarrollados.

Mirando al futuro inmediato, creemos que ahora más que nunca debemos acelerar el ritmo de la colaboración, ante los desafíos sanitarios, socio económicos y de seguridad que enfrentamos conjuntamente. En este marco, nos esforzaremos para que, en la COP27, los países y organizaciones de América Latina y el Caribe vuelvan a tener su casa en Sharm el Sheik, donde puedan encontrarse, intercambiar y avanzar todos juntos para alcanzar una mayor ambición que nos permita lograr un futuro mejor.

Jolita Butkeviciene



Prólogo II

Mario Cimoli

Secretario Ejecutivo a.i. de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El cambio estructural transformador y progresista de América Latina y el Caribe exige un conjunto articulado de políticas que desde la CEPAL hemos denominado un Gran Impulso para la Sostenibilidad. Esta transformación requiere la coordinación de las políticas tecnológicas e industriales, fiscales, financieras, ambientales, sociales y regulatorias, así como la participación del sector público, privado, de la ciudadanía y de la academia. Su objetivo ha de ser el establecimiento de una nueva estructura de incentivos a favor de la inversión sostenible, la generación de empleos de mayor productividad y el desarrollo de cadenas productivas de los mercados del futuro.

La acción climática busca el cumplimiento del Acuerdo de París para limitar el calentamiento bajo 2°C y cerca de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales reduciendo así los daños al patrimonio natural y a la provisión de servicios ecosistémicos esenciales. Al mismo tiempo, la acción climática se traduce en el lanzamiento de una nueva fase de industrialización con actividades que tiendan a la sostenibilidad, la carbono neutralidad y el respeto a la integridad de los ecosistemas. Se trata de un desafío gigantesco y urgente; las acciones necesarias para alcanzar la neutralidad climática implican cambios drásticos en los patrones de inversión, producción y consumo. Un desarrollo más sostenible implica más igualdad y cohesión social, con una matriz de servicios públicos de alta calidad y una orientación del consumo privado que sea coherente con el

nuevo paradigma. En este sentido, el desafío del cambio climático es parte del reto de lograr un desarrollo más sostenible. El proceso de transición implica desafíos importantes, especialmente en el caso de países altamente endeudados y con estructuras económicas fuertemente dependientes de los combustibles fósiles, como algunos de la región. No obstante, la transición hacia la descarbonización también abre posibilidades en distintos sectores que pueden constituirse en el centro de las políticas en favor del gran impulso para la sostenibilidad y de la economía circular, como las energías renovables no convencionales, la movilidad sostenible, la bioeconomía, la economía del cuidado y las soluciones basadas en la naturaleza, entre otros.

Como se esperaba, en la COP26 el financiamiento climático fue el principal tema de discusión, con la legítima demanda de que se cumpla el compromiso de financiamiento anual de US\$ 100 mil millones con urgencia hasta el 2025, destacando la importancia de la transparencia en la implementación. Desde CEPAL destacamos el fuerte esfuerzo financiero y la urgente reforma institucional a la arquitectura de la deuda multilateral necesarios para mejorar la corresponsabilidad en el mercado de deuda soberana, con especial énfasis en los países caribeños. También proponemos un cambio en los mercados de capital regionales y alinearlos con los objetivos del Acuerdo de París para gestionar adecuadamente los riesgos financieros

relacionados con el clima y aprovechar las oportunidades de la transición ecológica. La necesidad de lograr un equilibrio entre la mitigación y la adaptación respecto a su financiamiento resulta crucial para lograr los objetivos marcados en la pasada cumbre climática.

Uno de los principales logros de la COP26 es la finalización de las normas de aplicación del Acuerdo de París. En términos de implementación, por ejemplo, los países están llamados a informar bajo una mayor transparencia. Sobre este tema la CEPAL presentó la plataforma NDC-LAC y lanzó el “Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa”, ambas herramientas que, en alianza con otras organizaciones, ponemos a disposición de los países para hacer frente a la emergencia climática.

Finalmente, los asuntos de colaboración y alianzas también fueron centrales, considerando las distintas convocatorias para la implementación del programa de trabajo de Glasgow sobre Acción para el Empoderamiento Climático, sobre Derechos Humanos, Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer. En este sentido la CEPAL, apostando siempre por el principio de inclusividad, participó en diferentes eventos relativos al Acuerdo de Escazú y los derechos de las mujeres indígenas de la región.

Para la CEPAL fue un honor coauspiciar el pabellón de EUROCLIMA+ en la COP26, que fungió como la casa de América Latina y el Caribe durante los días que duró la cumbre en Glasgow. En este sentido, CEPAL confirma su compromiso con nuestros socios de EUROCLIMA+ para redoblar esfuerzos en el futuro. Este estudio resulta de gran importancia para guardar en nuestra memoria los contenidos de lo expuesto en el Pabellón de EUROCLIMA+ en la COP26, para hacer frente a la crisis climática que estamos viviendo y atravesar este cambio de época dejando la menor huella posible.

Mario Cimoli



LILIAM RIVERA

Ministra de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras

“En nuestro caso ya no tenemos tiempo. Tenemos la obligación indelegable de dar una respuesta inmediata y deseáramos que los que ejercen más presión sobre el clima se responsabilicen”.

1. Ambición para la mitigación y la adaptación

A una semana de comenzar la COP26, ONU Cambio Climático (CMNUCC) publicó un preocupante informe que indicaba que las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) recibidas hasta la fecha se quedaban muy por debajo de los niveles de ambición necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Cumpliendo con su obligación como firmantes de dicho acuerdo, de cara a la COP26, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe había actualizado sus CDN y, aunque con estas actualizaciones se aumentó el nivel de ambición para la mitigación y adaptación al cambio climático, aún queda mucho por hacer para llegar a los niveles de ambición necesarios para lograr limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5°C este siglo y evitar así los peores impactos del cambio climático.

EUROCLIMA+, IMPULSANDO LA AMBICIÓN CLIMÁTICA

Fomentar una mayor ambición tanto en mitigación como en adaptación climática en América Latina es una prioridad para EUROCLIMA+. Mediante su línea de acción Planes y Políticas, el programa trabaja junto con sus países socios para llevar a cabo cambios institucionales y políticos que faciliten el cumplimiento de los compromisos acordados en el marco de la CMNUCC y del Acuerdo de París, incluida la revisión de las CDN y las estrategias de largo plazo. EUROCLIMA+ también ha facilitado la puesta en marcha de numerosas Comunidades de Práctica para fomentar el intercambio de conocimiento sobre las CDN y ha creado un Espacio de Intercambio sobre las estrategias de largo plazo. Conozca las acciones que lleva a cabo EUROCLIMA+ para impulsar la ambición climática.

1.1 Estado de las contribuciones determinadas a nivel nacional y las estrategias de largo plazo

Dentro del marco del Acuerdo de París, las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y las estrategias de largo plazo (LTS) son dos instrumentos de planeamiento que actúan como hojas de ruta de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes de la crisis climática y para adaptarse a sus efectos.

Del 2 al 12 de noviembre de 2021, el Pabellón EUROCLIMA+ en la COP26 de Glasgow acogió varios eventos que abordaron el nivel de ambición de las CDN y la necesidad de reducir las brechas de implementación, es decir, cómo pasar rápidamente de los planes a las acciones concretas.

De gran utilidad fue la contribución de la CEPAL, que arrojó luz sobre el estado de las CDN de la región en un evento en el que se aportaron datos cuantitativos y cualitativos. El director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la organización, [Joseluis Samaniego](#), dio a conocer datos clave del último informe de monitoreo y análisis del nivel de ambición de las CDN. Según el reporte, las 17 actualizaciones presentadas entre 2020 y 2021 mejoran en un 9% el nivel de ambición con respecto a las anteriores versiones. Con esta mejora, las CDN de la región se ponen dos puntos porcentuales por delante del nivel medio de ambición de las CDN a nivel mundial.



De izquierda a derecha, Pablo Rojas, Carolina Urmeneta, Ligia Castro, Natalie Pareja, Sara Covaleda y Javier Mendoza

Por otro lado, el tipo de metas incluidas en las CDN está evolucionando, pasando de reflejar reducciones porcentuales de emisiones a una trayectoria de reducciones absoluta, en términos de toneladas de GEI, lo que facilita el monitoreo y favorece un mayor impacto de la acción climática. En este sentido, caben destacar las experiencias de Chile y Costa Rica, que han comenzado a usar los presupuestos de carbono dentro de su planificación de políticas públicas.

Además de un refuerzo del componente de adaptación, la CEPAL ha detectado que los países están mejorando sus CDN en claridad, transparencia y comprensión de la información sobre políticas climáticas, siguiendo así los lineamientos establecidos por la CMNUCC.

Otra buena noticia que se dio a conocer en el Pabellón de EUROCLIMA+ es que si bien, hasta 2020, 26 países condicionaban sus reducciones de emisiones GEI a transferencias financieras o tecnológicas del exterior, esa cifra ha bajado a 21. “Esto nos dice que hay una mayor autonomía en la región a la hora de tomar decisiones que implican un progreso técnico y que están menos sujetas a las transferencias internacionales”, explicó Samaniego.

Sin embargo, la trayectoria y velocidad de descarbonización que auguran las CDN no es suficiente como para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, por lo que se requiere, en palabras de Samaniego, “un cambio estructural” en las políticas.

La CEPAL estima que con un escenario inercial o de business as usual, la región emitiría 3,7 gigatoneladas anuales de CO₂ para el 2030; mientras que para cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5°C habría que emitir tan solo 1,7 gigatoneladas. Así, la CEPAL recomienda multiplicar por 4 o 5 la tasa actual de descarbonización hasta una reducción anual de emisiones del 7,3% para poder lograr el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C.

La aceleración necesaria de la descarbonización solo será posible si se llevan a cabo cambios estructurales que pasan principalmente por una redistribución de los flujos financieros hacia la economía verde. En este sentido, el especialista de la CEPAL lamenta que no se haya aprovechado la oportunidad de los planes de recuperación tras la pandemia para reconducir las inversiones hacia la economía verde.

“Las inversiones verdes sin duda van creciendo de manera muy importante, pero si hacemos la contabilidad neta, vemos que todavía la parte verde es muy minoritaria respecto a la parte comprometida con los combustibles fósiles. Tiene que haber un trabajo con los ministerios que están tomando decisiones ambientales implícitas, como Obras Públicas, Agricultura, Infraestructura y Hacienda, para alinear la ambición que estamos reflejando en las CDN con lo que está pasando realmente en el campo de la inversión”.

Joseluis Samaniego

Sivia Brugger, representante de GIZ, una de las agencias implementadoras de EUROCLIMA+, incidió en la necesidad de impulsar la transformación del modelo de desarrollo. Esta transformación, dijo, requiere visiones a largo plazo y enfoques interdisciplinarios innovadores y para ello se necesita información completa sobre las políticas climáticas sectoriales en energía, transporte, agricultura y edificios, entre otros.

Precisamente monitorear y evaluar la implementación de las CDN de la región manteniendo una visión de conjunto es el objetivo de la herramienta digital NDC LAC, presentada durante un evento en el Pabellón de EUROCLIMA+. La herramienta es una iniciativa conjunta de LEDS LAC, EUROCLIMA+, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Fundación Avina.

NDC LAC es muy útil no solo para identificar las tendencias y las brechas de implementación sino para hacer proyecciones de emisiones y evaluar en qué medida los países de la región se acercan o alejan de las metas del Acuerdo de París.

Además de las CDN, el Pabellón puso el foco en las estrategias climáticas de largo plazo con ricos **intercambios** promovidos principalmente por las agencias implementadoras de EUROCLIMA+. Estos eventos sirvieron para compartir experiencias, cerrar brechas de conocimiento y capacidades, y fomentar la colaboración para aumentar el nivel de ambición de las estrategias.

Horst Pilger, jefe de Sector de la Dirección de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, reiteró el compromiso de EUROCLIMA+ con la región en este aspecto, desde el convencimiento de que “las estrategias de largo plazo representan una gran oportunidad para establecer las bases de un desarrollo transformador en los países”.

A cierre de este reporte (en abril de 2022), seis países de la región **han presentado** sus estrategias de largo plazo a la CMNUCC: Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.

Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático de Chile, destacó el trabajo multi-ministerial que se llevó a cabo impulsado por la presidencia chilena de la COP25 para la elaboración de la estrategia nacional de largo plazo, a la par de la elaboración del proyecto de ley sobre cambio climático. En el momento de celebrarse la COP26, el proyecto de ley había pasado su primer trámite parlamentario y a fecha de hoy (abril de 2022), la ley ya ha sido aprobada por el Congreso, convirtiendo a Chile en el primer país de la región en fijar por ley la meta de la neutralidad de carbono para 2050.

Javier Mendoza, responsable de la elaboración de la estrategia de largo plazo de Colombia, ahondó en los retos que implica una planificación al horizonte de 2050 dentro de los ciclos políticos cortos y de las inercias institucionales. A estas dificultades inherentes, se le sumó la pandemia de la COVID-19 que alteró el importante proceso de consulta que tuvo que ser reorganizado en formato virtual. El responsable colombiano destacó el apoyo de Expertise France, en el marco de EUROCLIMA+, en la búsqueda de un enfoque integral y participativo.

“Fue un gran reto abrir espacios de construcción de confianza y construcción participativa con grupos tan variados, no solamente los de siempre como el sector público sino algunos actores clave del sector privado, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, con grupos de jóvenes activistas que muchas veces no están incluidos en este tipo de procesos, pero que, por supuesto, si estamos hablando de futuro, tienen mucho que decir”.

Javier Mendoza

Los diferentes intervinientes coincidieron en que el valor añadido de contar con estrategias de largo plazo no es la puesta en marcha de nuevos planes o procesos, lo cual es la responsabilidad de las CDN, sino que las LTS marcan una visión con la que alinear la planificación y la implementación para la construcción de la neutralidad y la resiliencia al horizonte de 2050.

Si el enfoque transversal de las políticas sectoriales de mitigación y adaptación de las CDN es importante, más importante aún es que ese enfoque transversal y holístico esté presente en la elaboración de las estrategias de largo plazo que tienen un gran

potencial para la construcción de sociedades sostenibles. En este sentido, **Natalie Pareja**, directora nacional de Cambio Climático de Uruguay, destacó la necesidad de incorporar la creación de empleo, la transición justa y la perspectiva de género en la planificación de las estrategias de largo plazo.

Particularmente interesante fue conocer de primera mano la experiencia de Panamá, que ya es uno de los tres países del mundo carbono neutrales junto con Bután y Surinam. **Ligia Castro**, directora de Cambio Climático, explicó que su país está elaborando la estrategia de largo plazo con el objetivo de hacer que Panamá pase de ser carbono neutral a ser carbono negativo, y para ello se están incrementando los esfuerzos tanto de reducción de emisiones como de captura de carbono en bosques, pastos marinos y manglares. En paralelo, se está elaborando una Ley marco de cambio climático que, entre otros, prevé la creación de un Viceministerio especial de cambio climático. Así mismo, se están creando sistemas a base de estándares y certificaciones para dar alicientes a la reducción de la huella de carbono por parte de gobiernos subnacionales y empresas.

Honduras es otro país que está en proceso de elaboración de su estrategia de largo plazo. **Arnoldo Pineda**, asesor en Gobernanza y Finanzas del Clima, destacó la importancia que en este proceso se está dando a los aspectos de adaptación, puesto



Reunión con la Delegación de Uruguay en la COP26

que su país es uno de los más expuestos a los efectos del cambio climático como son las sequías y los huracanes. Por otro lado, subrayó la necesidad de incorporar a los jóvenes y a la academia en los procesos participativos de elaboración de la estrategia para que ésta sea inclusiva y cuente con las opiniones mejor informadas tanto de dentro como de fuera del país. En este sentido agradeció a EUROCLIMA+ la organización de eventos de intercambio de experiencias con otros países de la región y con las agencias de cooperación.

En cuanto al apoyo internacional a los procesos de elaboración de las estrategias de largo plazo, se destacaron iniciativas multi-agencia de la mano de FIIAPP, PNUMA, CEPAL, EUROCLIMA+, NDC Partnership o el BID. Estas agencias y programas están dando apoyo multidisciplinar a diferentes actores nacionales para, en palabras de **Cayetano Casado**, responsable en NDC Partnership, “hacerles la vida más fácil a los países para movilizar apoyo técnico y financiero a través de socios de cooperación multilateral, bilateral y organizaciones de sociedad civil internacional”.

1.2 Coordinación multinivel: de lo local a lo internacional

La integración vertical entre los diferentes niveles de gobierno nacional, subnacional, local y con actores no gubernamentales; y la colaboración horizontal, entre los diferentes países; son fundamentales para una planificación e implementación exitosa de las CDN y las estrategias a largo plazo. En diferentes eventos quedó de manifiesto con ejemplos de éxito y resultados claros que es necesaria una mayor gobernanza multinivel y cooperación en todos los niveles.

La integración vertical fue precisamente el tema central de un evento organizado por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica con la participación de República Dominicana, Chile, Honduras y el PNUMA, EUROCLIMA+ y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD). Quedó de

manifiesto que apostar por una mayor gobernanza multinivel es apostar por la descentralización de la toma de decisiones y un reparto más equitativo de poder y que ambas herramientas favorecen además una mayor igualdad de género.

Para que la gobernanza multinivel funcione debe estar regida por un mandato y estar planificada, y no ser aleatoria, dijo **Daniel Morchain** de IISD, que enumeró cuatro factores de éxito que debe tener toda acción multinivel: financiación, marco institucional de gobernanza, intercambio de información y fortalecimiento de las capacidades.

Centrándose en la adaptación, Morchain dio motivos de peso para apostar por esta integración multinivel. Por un lado, porque así lo establece el marco internacional acordado en el Acuerdo de París y la CMNUCC y, por otro lado, porque es de justicia que así sea.

“La adaptación ocurre en un contexto local, y por ello es lógico, justo y necesario, que los actores locales jueguen un rol determinante en su definición y ejecución”.

Daniel Morchain

Precisamente, en Centroamérica encontramos algunos de los países más vulnerables al cambio climático en el ámbito mundial. Es el caso de Guatemala, cuyo viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, **Fredy Antonio Chiroy**, explicó cómo están aplicando un enfoque multinivel en las políticas de adaptación.

Guatemala está diseñando de manera inclusiva 22 planes departamentales de adaptación, uno por departamento, para tener en cuenta las necesidades locales. Este imperativo de adaptar las políticas a la realidad del terreno va más allá de los límites locales e incluso de las fronteras nacionales. Así, el país, con el apoyo de EUROCLIMA+, ha puesto en marcha dos proyectos climáticos binacionales: uno con Honduras para impulsar el Corredor Biológico Sustentable

Cuyamel/Omoa-Punta de Manabique en una zona de un altísimo valor ecológico, y otro con Panamá en las regiones Maya-q'eqchi' y Garífuna para fortalecer los sistemas indígenas de producción sostenible de alimentos y afianzar la resiliencia a los impactos climáticos.

Promover y apoyar acciones locales y nacionales para aumentar la resiliencia en Centroamérica es uno de los focos de actuación de EUROCLIMA+ y una de las líneas de ese trabajo se desarrolla en colaboración con las organizaciones del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Fruto de esta colaboración se han puesto en marcha proyectos para el Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequías, y se ha creado el Centro Virtual de Tiempo Atmosférico Severo (CVTAS), que fue presentado en la COP26.

Jair Urriola, secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), subrayó la especial vulnerabilidad de la región a los eventos hidrometeorológicos exacerbados por el cambio climático, como son los largos periodos de sequía y olas de calor, por un lado, y las fuertes lluvias, por el otro, que pueden hacer que “en dos semanas llueva todo lo que debería llover en un año completo”, dijo.

Liliam Rivera, ministra de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, abogó por acelerar el paso en la provisión de medidas de resiliencia y llamó a la responsabilidad de quienes más están influyendo en el cambio climático.

“En nuestro caso ya no tenemos tiempo. Tenemos la obligación indelegable de dar una respuesta inmediata y deseáramos que los que ejercen más presión sobre el clima se responsabilicen”.

Liliam Rivera

Fernando López, ministro de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, defendió la necesidad de seguir cooperando a nivel regional para reforzar los

sistemas de alerta temprana porque “somos fieles creyentes de que los sistemas de alerta temprana tienen la misión de salvar vidas (...). Es importante que sigamos trabajando en el fortalecimiento de los sistemas y de las capacidades de nuestro personal. La región centroamericana es una región que está dividida por fronteras políticas, pero en el tema del clima, de vulnerabilidad, de cultura, somos una sola nación”.

Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, reiteró la apuesta de su país por “trabajar con los gobiernos, las ONG y los organismos de apoyo financiero para que en nuestra región centroamericana SICA, seamos cada día más conscientes y avancemos en la dirección correcta, con el apoyo de los amigos que necesitamos para esta lucha conjunta”.

Llevando la colaboración entre países más allá del ámbito regional, tuvo lugar un evento para analizar los resultados del apoyo de la Unión Europea y otros actores globales de cooperación a la cooperación multinivel en África, Asia y América Latina. El evento se enfocó en el sector del transporte, uno de los que tienen mayor potencial de mitigación en la región ya que está detrás del 31% de los GEI.

Carolina Simonetti, jefa de Asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile presentó las conclusiones de un estudio elaborado con el apoyo de GIZ, sobre buenas prácticas y recomendaciones para América Latina en materia de ambición climática en el sector del transporte. El estudio destaca la urgencia de incluir en las estrategias de largo plazo de América Latina un enfoque en tres pasos: evitar, cambiar, mejorar (*avoid, shift, enhance*, en inglés).

A la vista de la rápida urbanización de la región y del hecho de que a medida que la población gana en poder adquisitivo aumenta su motorización, y con ello aumentan las emisiones y empeora la calidad del aire, es necesario invertir rápidamente en energías renovables, electromovilidad y micro movilidad tanto para el transporte público como privado. Según el estudio, el uso de vehículos eléctricos en lugar de vehículos con motor de combustión implica una

reducción de un 35% de GEI teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de los mismos.

Por otro lado, se puso de manifiesto la necesidad de generar oportunidades de aprendizaje e intercambio de experiencias, así como de fomentar plataformas y redes de cooperación para facilitar la búsqueda de apoyos técnicos y financieros. El evento dio a conocer ejemplos de cómo la cooperación internacional está facilitando que agencias y programas como GIZ y EUROCLIMA+ puedan ayudar a hacer avanzar la planificación e implementación de políticas climáticas en países tan diversos, pero con puntos en común, como son Kenia y Chile. Precisamente, el evento puso de manifiesto el beneficio de la puesta en común de buenas prácticas como primer paso para su replicación y escalabilidad en otros territorios.

1.3 Transición en el sector energético

El 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial proceden de la extracción y uso de la energía. La descarbonización de las economías de la región pasa necesariamente por una transición del sector energético y una mayor eficiencia en la manera en la que usamos la energía en nuestros procesos productivos, en el transporte y en los edificios.

En este sentido, **Raúl Delgado**, especialista en Cambio Climático del BID, destacó cuatro áreas de acción para que la región alcance cero emisiones netas de carbono: primero, que las energías renovables, solar y eólica, desplacen a los combustibles fósiles en la generación de electricidad; segundo, una electrificación masiva del transporte, la calefacción y las cocinas; tercero, impulsar el transporte público y el transporte no motorizado como la bicicleta a la vez que se fomenta el teletrabajo; y, cuarto, frenar la deforestación y restaurar los bosques y los ecosistemas. El experto añadió una quinta área de acción transversal a las anteriores como es el imperativo de avanzar en la eficiencia energética en todos los sectores.

Los expertos/as destacaron que la tecnología para avanzar hacia la descarbonización de manera mucho más rápida existe con una ratio coste-beneficio ventajoso. Así, Delgado destacó las dramáticas bajadas de precios de las baterías y los paneles solares que, por ejemplo, hoy cuestan la quinta parte de lo que costaban hace ocho años, con estimaciones de que el coste caiga entre el 25 y el 58% para el 2030.

En este sentido, **Antonio Urrutia Lemus**, director de Cambio Climático de Guatemala, destacó que su país quiere lograr que para 2030, el 80% de su matriz energética sea renovable.

A los beneficios para el clima y la salud de la descarbonización, se suma la creación de empleo, con 15 millones de empleos nuevos solo en América Latina. El BID ha calculado además los beneficios económicos que por ejemplo para un país como Costa Rica serían de 41.000 millones de dólares o de 140.000 millones para Perú.

Fernando Andrade, especialista regional de cambio climático del PNUD, destacó la importancia de las nuevas fuentes alternativas de energía como es el hidrógeno verde y explicó cómo Argentina y Chile están invirtiendo en el desarrollo de esta energía.

EUROCLIMA+ está cooperando con los países de la región para avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente. En Paraguay, el programa de la Comisión Europea ha apoyado a la Dirección Nacional de Cambio Climático, en el desarrollo de una herramienta para la medición del uso eficiente de la biomasa por parte de pequeñas y medianas empresas agroindustriales.

En 2019, en el marco de los Diálogos País de EUROCLIMA+, Paraguay celebró una Mesa País sobre cambio climático donde se establecieron 15 actividades prioritarias para mitigar las emisiones GEI y así lograr los objetivos de su CDN. Este país depende en buena parte de la quema de biomasa para obtener electricidad, con una matriz compuesta en un 40% por la energía de biomasa, otro 40%

de combustibles fósiles y un 20% de energía hidroeléctrica.

Por esto, el interés nacional es que la biomasa sea una energía renovable y para ello tiene el objetivo de reducir hasta en un 40% las emisiones procedentes de su uso. Para promover un uso sostenible de la biomasa se desarrolló la denominada ‘Herramienta de cálculo del consumo energético de biomasa’, una calculadora de fácil uso autodiagnóstico y de libre acceso que mide la eficiencia energética en los sectores agrícolas y ganaderos que más dependen de la biomasa como son los secaderos de yerba mate y de granos, las olerías, las fábricas de cerámica y la ganadería avícola.

Al introducir una serie de datos en el sistema, la herramienta dice a la empresa cuánta energía de biomasa está produciendo, cuál es su nivel de eficiencia energética, cuánto está gastando y si hay una buena relación entre costo y eficiencia. Por último, la herramienta calcula cuánto se tendría que invertir para obtener una mayor eficiencia energética y si esa inversión será rentable y en cuánto tiempo se amortizaría.

La herramienta, que favorece el ahorro de costos y de emisiones, y logra mejoras sociales, está alineada con la CDN y con los planes de largo plazo a 2050, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La calculadora se ha desarrollado en el marco del ‘Programa de promoción del uso eficiente de la biomasa en PYMES de Paraguay’ promovido por el Viceministerio de Minas y Energía (VMMYE), y la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) con el apoyo de EUROCLIMA+.

1.4 Desarrollo, recuperación verde y salud pública

La pandemia de la COVID-19 provocó una caída en la actividad económica y del uso de las energías, lo que derivó en una reducción de las emisiones GEI que, sin embargo, solo fue circunstancial. Pronto se produjo un efecto rebote que dio paso a un crecimiento

continuo de las emisiones en línea con las dinámicas anteriores a la pandemia.

Desde la [CEPAL](#), se recuerda que la pandemia puso de manifiesto que es necesario un cambio estructural del modelo de crecimiento de la región para garantizar un desarrollo sostenible dentro de los límites ecológicos planetarios, y que ayude a cerrar las tres brechas persistentes en la región: la brecha de crecimiento económico, la de desigualdad y la de degradación ambiental.

Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, afirmó que la actual tasa de crecimiento económico de la región que fluctúa entre un 1,2% y un 2,6%, debería reducirse a la mitad para que fuera compatible con los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, un menor crecimiento impediría sacar a más personas de la pobreza.

La recuperación postpandemia tendría que haberse enfocado en una recuperación verde, insistió, desviando fondos de la economía basada en los combustibles fósiles a inversiones en energías renovables, reforzando las exportaciones de bienes avanzados y no solo de materias primas, en detrimento de las importaciones, creando empleo con valor añadido y apostando por la economía de los cuidados.

Por otro lado, la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Ana Gúezmes alertó de que la pandemia ha ahondado las desigualdades estructurales de género ya existentes en la región con una gran caída de la tasa de ocupación de las mujeres a favor del trabajo de cuidados no remunerado y abogó por una transición hacia la economía de los cuidados.

“Es necesario transitar hacia una sociedad del cuidado que articule el cuidado del planeta, de las personas y el autocuidado. La economía del cuidado es un sector dinamizador, clave para una recuperación transformadora, con igualdad y sostenibilidad”.

Ana Gúezmes

Pero los expertos y expertas insisten en que estamos aún a tiempo de cambiar el rumbo y apostar por cambios estructurales que faciliten alcanzar los ODS y las metas del Acuerdo de París.

Precisamente, sobre la importancia de integrar las políticas climáticas y de salud pública se habló en un evento organizado por la Global Climate and Health Alliance (GCHA). [Marina Romanello](#), directora de Investigación de Lancet Countdown, alertó sobre “los asesinos silenciosos”, en referencia al aumento de mortalidad observado en la región desde hace 20 años por las olas de calor, que tienen efectos particularmente letales en las poblaciones de adultos mayores y de niños menores de un año.

Además de los efectos directos sobre la salud, las olas de calor provocaron en el 2020, la pérdida de 10.500 millones de horas de trabajo en América Latina puesto que a altas temperaturas no es posible realizar labores agrícolas o en la construcción, sectores, por otro lado, que emplean a las poblaciones más vulnerables. Otros efectos del cambio climático como los cambios en los patrones de lluvias provocan

un aumento en las enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos.

Pero no solo de los efectos del cambio climático en la salud se habló en el Pabellón de EUROCLIMA+, también se tocaron cuestiones como la cría de ganado y el consumo excesivo de carne, que además de provocar altos niveles de emisiones de GEI, provocan enfermedades. En Brasil, se calcula que hay 42.000 muertes al año y en Argentina 20.000 ligadas al consumo excesivo de carne.

Nos encontramos pues ante evidencias científicas que indican que invertir en reducir las emisiones de gases GEI tendrá un efecto positivo en la salud de las personas y del planeta. En este sentido los expertos recomendaron incluir el tema de la salud en las CDN.



Participante en el Pabellón EUROCLIMA+



Guillermo Dascal, experto en Cambio Climático de EUROCLIMA+

MENSAJES CLAVE

- » Con las últimas actualizaciones presentadas a ONU Cambio Climático, las CDN de la región mejoran tanto desde un punto de vista cuantitativo, puesto que sus objetivos son más ambiciosos, como cualitativo, por su calidad y transparencia y porque el componente de condicionalidad disminuye.
- » Si bien, la mayoría de los países de la región han actualizado sus CDN aumentando el nivel de ambición para la mitigación y adaptación, en su conjunto estos planes no son suficientes para frenar el cambio climático y sus impactos.
- » Numerosos países ya cuentan con instrumentos de políticas nacionales como estrategias y leyes de cambio climático alineados con los objetivos internacionales. Un avanzado enfoque transversal y multiministerial y un alto componente de participación son claves para que estas políticas sean eficaces.
- » Para que la planificación e implementación de las CDN y las LTS sean eficaces, es necesaria una mayor gobernanza multinivel y una mayor cooperación a todos los niveles de gobierno y entre todos los tipos de actores.
- » La reducción de las emisiones GEI en la región pasa por una descarbonización y una mayor eficiencia energética. Las áreas de acción clave para la descarbonización son: transición de los fósiles a las renovables; electrificación masiva del transporte, la calefacción y las cocinas; impulsar el transporte público, el transporte no motorizado y el teletrabajo; frenar la deforestación y restaurar los bosques y los ecosistemas naturales.
- » El cambio climático está provocando graves problemas de salud en la población ligados a las olas de calor y las enfermedades transmitidas por vectores.
- » Reducir las emisiones de gases GEI tendrá un efecto positivo en la salud de las personas y del planeta y es necesario incluir la salud en las CDN.
- » Hacen falta cambios estructurales de los modelos económicos para hacer compatible el desarrollo y la mejora de la calidad de vida con los límites planetarios.

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

PAÍSES CITADOS

- » Argentina
- » Chile
- » Colombia
- » Costa Rica
- » El Salvador
- » Guatemala
- » Honduras
- » Panamá
- » Paraguay
- » Uruguay

HERRAMIENTAS CITADAS

- » Presupuestos de carbono
- » Ley de cambio climático
- » Gobernanza multinivel
- » Descentralización de la toma de decisiones
- » Sistemas de alerta

CENTROAMÉRICA •

Cooperar frente a los desastres

En esta región especialmente expuesta a los impactos climáticos, EUROCLIMA+ y SICA han puesto en marcha un proyecto para el Aumento de Capacidades para la Reducción del Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequías, y han creado el Centro Virtual de Tiempo Atmosférico Severo (CVTAS).



PARAGUAY •

Uso sostenible de la biomasa

El país depende en un 40% de la quema de biomasa para generar electricidad. Para reducir las emisiones GEI, se ha elaborado una herramienta para ayudar a las principales industrias agrícolas y ganaderas a calcular y reducir el uso de esta energía, lo que reduce costes y emisiones.

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

**GUATEMALA**

Planes departamentales de adaptación

Cada uno de los 22 departamentos tiene su plan de adaptación para adaptarse a las necesidades locales. Ha desarrollado dos proyectos binacionales de conservación y adaptación de ecosistemas, uno con Honduras y otro con Panamá.

**PANAMÁ**

Objetivo: país carbono negativo

Al ser ya uno de los tres países carbono neutrales del mundo, el objetivo ahora es ser carbono negativo. Para ello se aumentan los esfuerzos de reducción de emisiones, pero también los de captura, privilegiando los sumideros de carbono naturales.

**CHILE**

Impulso a la Estrategia de Largo Plazo

Se promovió un trabajo interministerial para crear la LTS y una ley sobre cambio climático. Chile es el primer país de la región en fijar por ley la meta de neutralidad carbono para el 2050.

JEFFREY SACHS

Economista

“No hay que invertir en nuevas exploraciones ni en oleoductos para combustibles fósiles (...). Si queremos llegar a cero emisiones de carbono dentro de 28 años, no creemos infraestructura de fósiles que van a durar 50 o 60 años”.



2. Finanzas del clima y rol del sector privado

Sin una redirección de las finanzas públicas y privadas hacia la economía verde, los países latinoamericanos no podrán lograr los objetivos del Acuerdo de París de mitigación y adaptación ni alcanzar sus metas de desarrollo. En la COP26 se conocieron los avances de la región en este ámbito, desde el desarrollo de hojas de ruta de descarbonización por sectores económicos, hasta la consideración de presupuestos de carbono a la hora de planificar las externalidades de las inversiones.

EUROCLIMA+ POR EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

El acceso al financiamiento climático representa uno de los grandes retos y una de las prioridades para la región. EUROCLIMA+ está facilitando el involucramiento de los actores del sistema financiero para fortalecer la acción climática y materializar una estrategia de recuperación sostenible, resiliente e inclusiva, y ha puesto en marcha además una [Comunidad de Práctica](#) sobre Sector Privado y Políticas Climáticas. [Conozca](#) las iniciativas de financiamiento climático que EUROCLIMA+ lleva a cabo actualmente en la región.

2.1 Retos y oportunidades para la financiación climática

El financiamiento climático es necesario no solo para reducir las emisiones GEI, sino también para generar resiliencia y desarrollo sostenible. La necesidad de transformar la matriz energética y satisfacer la creciente demanda de energía limpia para las próximas décadas en la región demanda un aumento de la inversión verde. Aunque se está

avanzando en la buena dirección y hay fuentes de financiación más diversas y más recursos a disposición, persisten retos para las finanzas verdes en América Latina, que fueron señalados por varios expertos y expertas durante la COP26.

El reconocido economista [Jeffrey Sachs](#), quien inauguró una de las sesiones sobre financiamiento climático, destacó la necesidad de financiamiento para i) impulsar la transición energética como parte de la agenda de mitigación, ii) responder a la adaptación al cambio climático, iii) y cubrir los impactos respecto a pérdidas y daños de los desastres causados por sequías, inundaciones y otros eventos extremos.

Sachs insistió que, aunque actualmente hay mayores flujos financieros hacia las energías renovables, aún se mantiene una fuerte financiación de los combustibles fósiles.

“No hay que invertir en nuevas exploraciones ni en oleoductos para combustibles fósiles (...). Si queremos llegar a cero emisiones de carbono dentro de 28 años, no creemos infraestructura de fósiles que van a durar 50 o 60 años”.

Jeffrey Sachs

Otros especialistas coincidieron en que los recursos financieros están cada vez más disponibles, pero faltan los mecanismos para dirigirlos a los proyectos concretos y faltan tecnologías adecuadas y marcos de gobernanza e institucionales que den estabilidad a esas inversiones.

Concretar modelos macroeconómicos en los que se inserten esos financiamientos y generar capacidades en otros sectores más allá de las energías renovables a través de alianzas público-privadas son otras de las estrategias para dinamizar el sector de las finanzas verdes.

“En Chile, por ejemplo, vamos a duplicar la capacidad solar y eólica. Estamos invirtiendo miles y millones sin subvenciones, simplemente creando un marco de estabilidad. Los inversores obtienen una rentabilidad y al mismo tiempo están reduciendo las emisiones”, explicó **Juan Carlos Jobet Eluchans**, ministro de Energía y Minería de Chile, quien insistió que la mentalidad de los inversionistas está cambiando porque conocen la rentabilidad que las finanzas climáticas están produciendo.

Las señales de los bancos de inversión

Ese cambio en la perspectiva de las finanzas verdes se corrobora a la luz de la evolución de las carteras de inversión de los bancos. **Elina Kamenitzer**, jefa de División de Acción Climática del Banco Europeo de Inversiones (BEI), explicó que los préstamos verdes abarcan cerca del 40% del total de los préstamos del BEI por un monto de cerca de 27.000 millones de euros. La ambición del BEI es que, en los próximos cinco años, la mitad del volumen de los préstamos se oriente a la financiación climática.

Con una mirada al futuro, **Elisabetta Siracusa**, asesora principal del Directorio General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capital de la Comisión Europea, detalló cuatro principios que van a guiar las políticas de los próximos años: que la financiación sostenible contribuya a la transición hacia una economía digital; la inclusión de pequeñas y medianas empresas en la transición verde; la resiliencia para que el sector financiero agregue los riesgos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad en sus modelaciones; y una perspectiva global que agregue otros actores internacionales.

Remco Fisher, de la Iniciativa de Finanzas del PNUMA, destacó el trabajo que se ha hecho desde

el 2017 para que los más altos cargos de los bancos conozcan de primera mano los riesgos y oportunidades financieras que conlleva el cambio climático y abanderen y transversalicen las finanzas verdes en sus operaciones. Para Fisher, el sector financiero está aumentando rápidamente su interés por contar con mayor información, transparencia y detalle en la gestión resiliente de los riesgos vinculados al cambio climático.

Sin embargo, advirtió de que se necesitan no solo perspectivas sobre el rendimiento de las inversiones, sino un elemento normativo de responsabilidad. “Lo que requeriría es que todos los CEOs y todas las empresas financieras digan ‘yo creo un futuro de 1,5 grados C’, no solo por la gestión de riesgo, sino por una cuestión existencial y por los beneficios generales que aporta a la sociedad”, enfatizó.

Riesgos y oportunidades financieras

Al igual que las instituciones europeas, la banca multilateral latinoamericana y las instituciones financieras nacionales y regionales deberían dar señales como reguladores que son de las necesidades de este sector para aumentar las inversiones verdes. **Gustavo Máñez**, coordinador regional de cambio climático del PNUMA, resaltó que las inversiones verdes en América Latina y el Caribe son un mercado de 1,3 trillones de dólares al 2030, una oportunidad económica excepcional con la que también se pueden crear casi 30 millones de empleos en el camino. “Es decir, es una plataforma para sacarnos de la crisis económica actual”, insistió.

Una de las tareas pendientes en la región es poder movilizar esos recursos hacia el sector de la naturaleza, que todavía está rezagado y es fundamental para responder al cambio climático. Mediante las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) se puede reducir hasta un tercio de las emisiones GEI a través de la captura de emisiones por medio de ecosistemas como selvas, humedales y océanos (conozca más de las SBN en el capítulo 4 de este estudio temático).

Uno de los pasos críticos para sacarle el máximo provecho a las inversiones verdes es movilizar a la banca privada para que tenga en cuenta los riesgos climáticos en sus inversiones y préstamos, algo que aún es incipiente en América Latina. Así, una reciente encuesta del PNUMA abarcando los 80 grandes bancos de la región, mostró que solo un tercio de estos bancos incorpora riesgos climáticos en sus estrategias y operaciones, igual sucede con algunos bancos centrales y reguladores financieros.

Para Máñez, esta visión miope puede obedecer a que aún no se vean tan tangibles los impactos climáticos y se considere que los peores impactos en nuestras economías no se producirán en el futuro cercano. Con esto se corre el riesgo de que actores tan importantes como los bancos centrales apuesten por invertir con una perspectiva de que el cambio climático impactará demasiado tarde para mitigar y adaptarse a sus efectos. Sin embargo, hay ya países como Panamá, Brasil, México y Colombia, que están liderando un cambio en esta senda.

“Estamos despertando esa conciencia del cambio climático en las inversiones financieras, pero en el sector de la naturaleza estamos todavía muy atrás. Y no nos olvidemos que la naturaleza puede resolver un tercio del problema gracias a la captura (de carbono) por los sistemas naturales”.

Gustavo Máñez

Por ejemplo, en Panamá, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas establecieron una estrategia de capacitación dirigida a las principales entidades públicas gestoras de proyectos de inversión para la aplicación de una guía técnica de inversiones que facilita la identificación del riesgo climático y cómo este afectaría tales proyectos. En paralelo, se ha avanzado en la construcción del mapa nacional de riesgo climático. Este instrumento estará a disposición de actores privados para facilitar la estimación de riesgos en sus proyectos de inversión e infraestructura.

En Brasil y México, las instituciones financieras están reestructurando sus procesos y esquemas organizacionales para responder a la crisis climática. El Grupo Financiero Banorte con presencia en México, por ejemplo, ha creado estructuras de gobernanza dentro de la institución para que el cambio climático, junto con otros aspectos como la desigualdad y la pérdida de la biodiversidad, sea abordado por su consejo de administración y los comités de sostenibilidad. También ha dispuesto una serie de sistemas de medición y verificación de riesgos climáticos y ha capacitado a su personal para que puedan elaborar tales escenarios.

En el caso brasileño, el segundo banco más grande del país, Bradesco, está trabajando en la incorporación de riesgos climáticos dentro de sus portafolios. **Marcelo Pasquini**, jefe de Gestión de Capital, Finanzas de Mercados, Acceso Gerencial y Sostenibilidad Corporativa, explicó que hay una urgente necesidad de entender qué tipo de información se necesita y cómo se va a relacionar con cada tipo de escenario para comunicarlo a los clientes. “Pertenece a un país bastante extenso y el traducir estos escenarios en términos de clientes concretos, carteras concretas, no siempre es fácil. Suele ser útil trabajar con expertos que se ocupan de cuestiones fiscales que trabajan con riesgos de transición”, añadió.

De otro lado, en Colombia, se ha buscado incentivar las inversiones sostenibles a través de la creación de una taxonomía verde. Esto es un sistema de clasificación de actividades económicas y activos que contribuyen a los compromisos ambientales del país. Con esta clasificación se busca facilitar la identificación de esos proyectos y así desarrollar los mercados de capitales verdes. En definitiva, lo que esto logra es impulsar movilizaciones más efectivas de recursos privados y públicos en aquellas actividades que se ajustan a los ODS y al Acuerdo de París.

Mariana Escobar Uribe, coordinadora del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia, explicó que tras realizar la Encuesta Bienal de Riesgos, Oportunidades de Asuntos Ambientales y Climáticos se diagnosticó que una barrera fundamental era

entender qué proyectos eran realmente verdes. Con esa intención, se empezó a coordinar el trabajo entre varias instituciones del gobierno para generar la taxonomía verde partiendo desde criterios ecológicos y financieros.

2.2 Alineación con el sector privado

El sector privado es esencial para aumentar la ambición climática de los países latinoamericanos. Su impulso en innovación e implementación de tecnologías que potencien la mitigación del cambio climático es invaluable. Por eso, el programa EUROCLIMA+ impulsa la coordinación intersectorial, multinivel y de múltiples interesados para que las empresas y gobiernos orienten de manera conjunta sus acciones y planes.

Aunque hay una importante porción de empresas que promueven acciones a favor de la mitigación y la adaptación al cambio climático, en muchos casos estas acciones no están debidamente alineadas con las metas a mediano y largo plazo de los países o faltan incentivos y mecanismos para que la transferencia de tecnologías y capacidades entre países fortalezca al sector privado latinoamericano. Durante la COP26, se mostraron avances para cerrar estas brechas gracias a hojas de rutas de descarbonización y plataformas para facilitar acuerdos comerciales.

Hoja de rutas de descarbonización

Generar una transición hacia nuevas economías bajas en carbono implica convencer al sector privado de los beneficios que conlleva esta transición. A esta tarea se han dedicado en los últimos años diversas iniciativas en Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina.

En Brasil, recientemente se publicó el estudio “*A New Economy for a New Era: elements for building a more efficient and resilient economy in Brazil*”, en el que se evidenció que elegir una nueva ruta económica representa mayores beneficios económicos y sociales que continuar con el modelo actual.

Al comparar tres escenarios de crecimiento: business as usual (BAU) (‘si todo sigue igual’), new economy (adoptando diferentes medidas bajas en carbono) y new economy+ (donde se intensifica la producción agropecuaria más allá de BAU), el resultado demostró que bajo el tercer escenario la economía podría crecer hasta \$534.000 millones, generando un incremento de dos millones de nuevos puestos de trabajo y restaurando 12 millones de hectáreas degradadas.

“Tenemos muchos pastos y zonas cultivables. Francamente, no necesitamos continuar talando árboles para que nuestra economía, nuestra agricultura, siga siendo competitiva”, explicó durante su presentación [Carolina Genin](#), directora del programa de Clima del *World Resources Institute (WRI)*, entidad que elaboró el estudio para Brasil.

Para superar cierto escepticismo y resistencia del sector privado, países como Costa Rica, Argentina y Chile están adoptando hojas de ruta sectoriales de descarbonización que traducen en las industrias específicas los objetivos generales que se ha trazado el país.

En Costa Rica, dentro del marco del Programa País Carbono Neutral, se trabaja en rutas sectoriales que brindan una línea base sobre las condiciones actuales de funcionamiento de las empresas, sus fuentes de emisiones y el contexto tecnológico actual, y su evolución a mediano y largo plazo. Estas herramientas actúan como un tablero de mando que permite tener información y planificar la toma de decisiones, conociendo las alternativas posibles para reducir emisiones y calculando los ahorros económicos potenciales.

Por ejemplo, el gobierno costarricense elaboró un estudio para el sector de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que permitió presentar a las empresas siete opciones tecnológicas diferentes de las 16 disponibles en el mercado, que son menos costosas y contaminantes respecto a las que actualmente usan esas mismas empresas.

“La idea es que podamos decirles exactamente cómo debería ser ese proceso de descarbonización, pero

tomando en consideración las estrategias de negocio en el contexto empresarial”, anotó **Laura Mora** Mora, coordinadora del Programa País de Carbono Neutralidad 2.0, del Gobierno de Costa Rica.

Las hojas de rutas de descarbonización deben volverse “más una estrategia de negocio que una obligación de cambiar por reglas establecidas. Es más fácil para un empresario, o para un modelo de negocio, tener información que demuestra que su negocio puede continuar, evolucionar y seguir creciendo que hacerlo de forma obligada y empujada”.

Laura Mora Mora

En Chile, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático ha logrado la firma de 191 acuerdos voluntarios con más de 8.600 empresas comprometidas con la producción limpia, la descarbonización y el cumplimiento de los ODS. Estos instrumentos persiguen fijar metas y planes de acción en línea con los objetivos nacionales, así como impulsar la transferencia tecnológica y asegurar una continuidad institucional. Estos acuerdos cuentan también con mecanismos de medición, reporte y verificación, lo que genera valor para las empresas pues al medir su avance también pueden obtener un reconocimiento por sus acciones climáticas.

En el caso de Argentina, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) ha creado exitosamente hojas de rutas sectoriales para el desarrollo sostenible al horizonte 2050. Uno de los primeros sectores con el que se trabajó fue el sector del gas y el petróleo. Se elaboró una hoja de ruta para el cumplimiento de los ODS, estableciéndose con ello una puerta de entrada estratégica para a continuación plantear la descarbonización, cuyo fin es mucho más desafiante para las empresas de este sector. Otra experiencia destacada de descarbonización implica a los sectores siderúrgico y el cementero, altamente emisores de GEI.

Las expertas de Chile, Colombia y Argentina, que expusieron los casos anteriores, señalaron tres recomendaciones a los retos que enfrenta la implementación de las hojas de rutas de descarbonización:

1. **Perspectiva de oportunidades para las empresas.** Con el fin de obtener un mayor compromiso del sector privado es estratégico señalar estos instrumentos como una oportunidad atractiva de negocio y no como una limitación a su desarrollo de cara al 2050.
2. **Marcos institucionales de largo plazo.** Las experiencias en Argentina y Costa Rica resaltaron la importancia de contar con marcos institucionales que le den continuidad a estos ejercicios más allá de la administración de turno. Las hojas de ruta de descarbonización, al ser percibidas como ejercicios estratégicos de largo plazo, son mejor recibidas por el sector privado, que teme que sean esfuerzos coyunturales intermediados por intereses políticos. Esto también se puede lograr con la puesta en marcha de apoyos financieros por parte del gobierno que no estén sujetos al corto plazo.
3. **Mejoramiento en la calidad de la información y manejo de datos.** Tanto obtener información para brindarle al sector privado como mejorar el procesamiento de los indicadores de seguimiento y verificación de las hojas de ruta es un reto para que estos instrumentos sean adoptados. Las experiencias regionales actuales muestran que tener claras mediciones del ahorro que representa el cambio tecnológico puede impulsar la acción climática desde las empresas.

Plataforma para acuerdos comerciales

Otra manera de promover la vinculación del sector privado y su alineación con las ambiciones del Acuerdo de París es la promoción de acuerdos comerciales de transferencia tecnológica. Generar esas alianzas es la razón de ser del programa Low Carbon Business

Action (LCBA) promovido por la Unión Europea y que se está implementando con socios en Argentina, Brasil, Chile y Colombia desde el 2020.

Este programa consiste en una plataforma de negocios que fomenta la generación de acuerdos comerciales, de transferencia de tecnología y conocimiento entre pymes tecnológicas europeas y empresas latinoamericanas que buscan soluciones de descarbonización o de economía circular. Al formar parte de esta plataforma, cuya participación es gratuita, las empresas latinoamericanas cuentan con información tecnológica y de inteligencia comercial de potenciales contrapartes de la Unión Europea; una tarea de identificación que de otra manera tendría un coste disuasorio para las empresas.

El LCBA cuenta con todo un paquete de asistencia técnica especializada que ayuda a generar los acuerdos de colaboración entre empresas, así como resolver inquietudes en aspectos legales, financieros y medio ambientales según las normativas de la Unión Europea. Además, también ofrece contactos con instituciones financieras que ofrezcan líneas crediticias acordes al proyecto a implementar.

En América Latina, los sectores que están participando principalmente son: sector agrícola y forestal en el fomento de los biocombustibles, gestión de residuos sólidos, procesos industriales, eficiencia energética y energías renovables.

Uno de los casos que se destacaron durante la COP26 fue la colaboración que se está gestando entre JMB Ingeniería Ambiental, una empresa de servicios ambientales con 23 años de experiencia en Argentina, y un socio tecnológico en Bélgica, la empresa Haemmers. Uno de los retos en los que trabaja JMB es llevar transferencias tecnológicas a territorios rurales alejados, donde tienen presencia industrias extractivas. El proyecto que impulsan, a través del apoyo de LCBA, se centra en la gestión de residuos en la producción del gas natural. Para este sector, hay una urgente necesidad de aumentar la eficiencia y a la vez cumplir con la normativa ambiental en la recuperación de los residuos que generan los yacimientos.

Otros casos destacables son el Carbon Free Farm de Brasil, un sistema que ayuda a las explotaciones agrícolas, especialmente en ganadería intensiva, a reducir las emisiones de metano y una iniciativa del Grupo Carvajal en Colombia que busca utilizar el bagazo restante de la producción de la caña de azúcar como combustible y así reducir el uso de combustibles fósiles. Ambos proyectos están trabajando con LCBA para encontrar socios técnicos que les ayuden a mejorar sus procesos y a comprar equipamiento.

2.3 Instrumentos de precios al carbono

A la par de establecer estos puentes en financiación y transferencias tecnológicas, la descarbonización es una tarea que también puede acelerarse con diferentes mecanismos de política. Un camino para acelerar la transición son los precios al carbono, para que las actividades con altas emisiones sean menos atractivas económicamente que las actividades bajas en emisiones. Estos precios al carbono pueden traducirse en la política fiscal en forma de impuestos, aumentando los ingresos para los estados; o en la regulación de las políticas de gasto, fijando por ejemplo criterios para inversiones públicas.

En el evento “Instrumentos de precios al carbono, aplicaciones en América Latina y El Caribe”, diferentes expertos discutieron el actual panorama de estos mecanismos de política en la región. [Joseluis Samaniego](#), director de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, advirtió de que este tipo de impuestos al carbono en la región están en niveles muy bajos, lo que ayuda poco a la recaudación y no tiene un efecto tan grande en el cambio de conductas del sector privado, si se compara con el potencial que tendría aplicar impuestos más altos, como se ha visto en otras regiones.

Actualmente, solo México, Argentina, Colombia y Chile aplican impuestos al carbono. Los primeros tres tributan sobre la base de las emisiones de carbono de los combustibles fósiles; y el último sobre las emisiones efectivamente realizadas en

la actividad económica. Los sectores excluidos de estos instrumentos también dependen de los casos particulares de las economías nacionales, por ejemplo, en Colombia el carbón está exento de este impuesto, y en México, el gas.

En Colombia, el impuesto fue implementado desde el 2016 y actualmente tiene un precio de unos cinco dólares por tonelada. “Es un precio bajo si se compara con otros países fuera de la región, pero responde a la coyuntura y la formación de los precios colombianos”, anotó [Laura Marcela Ruiz](#), asesora del Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Este tributo busca cambiar el comportamiento de estos sectores al mismo tiempo que mantener las demandas de crecimiento económico del país y aportar recursos para impulsar acción en otros sectores como el forestal.

En Chile, el impuesto tiene vigencia desde el 2017 y ha logrado recaudar unos 200 millones de dólares anuales, con un valor de cinco dólares por tonelada de CO₂. Una de las particularidades de este instrumento es que permite incluir las emisiones de otros gases como óxido de nitrógeno y azufre. Sin embargo, “el impuesto afecta principalmente a las termoeléctricas, y con el valor actual no incide mucho en el recambio tecnológico”, explicó [Juan Pedro Searle](#), jefe de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Energía de Chile.

Precio social al carbono

Además de estos tributos, otros países han venido avanzando en crear políticas de precio social al carbono que no solo estiman el precio por las emisiones actuales, sino que miran los impactos de estas emisiones al largo plazo. El precio social al carbono se refiere a una valoración de las emisiones que toma en cuenta los costos y beneficios sociales y no solo los precios del mercado. Al calcularse, el precio social puede ser incorporado en los sistemas nacionales de inversión pública que ayudan a cambiar las rentabilidades relativas de los proyectos de inversión, incentivando proyectos bajos en carbono.

Actualmente, en América Latina, esto solo se aplica en Perú y Chile.

En los últimos 10 años, Chile ha avanzado en la adopción de este precio social en su Sistema Nacional de Inversiones. En 2011, este precio fue fijado en cinco dólares por tonelada y tras una importante actualización con base en diferentes metodologías, se fijó en 32,5 dólares como valor medio en el 2017. A través de este mecanismo, se pueden realizar simulaciones de distintos proyectos de energía, infraestructura y movilidad urbana para ver cómo el precio social influye en las estimaciones de estos proyectos.

En el marco de esta actualización, también crearon una herramienta web para el cálculo de la eficiencia energética de los edificios públicos que ha impulsado alternativas bajas en emisiones para edificaciones como cuarteles de policía. En los próximos años, se buscará expandir estos cálculos para el caso del carbono negro, que resulta de la combustión incompleta de diésel, biocombustibles y biomasa.

En Perú, se han creado tasas de descuento con las que se evalúan los proyectos de inversión. En este caso, se distribuye el costo de la inversión en el tiempo, teniendo plazos más relajados en el comienzo para que los proyectos rindan los beneficios sociales y se va incrementando el valor paulatinamente.

Otro país que viene avanzando en esta línea es Costa Rica, que espera contar para el 2022 con un precio social al carbono ya calculado para transversalizarlo a través del Sistema Nacional de Inversión Pública gracias al trabajo del Ministerio de Planificación. [Francisco Tula](#), director del Área de Inversiones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, aseguró que uno de los desafíos más notorios es incorporar un precio al carbono que tenga una implementación efectiva y otro es la capacitación de los actores involucrados en el ciclo de las inversiones públicas desde los formuladores de proyectos hasta los profesionales del gobierno.



El trabajo de Costa Rica cuenta con el apoyo de EUROCLIMA+ a través de la CEPAL como agencia implementadora, para impulsar el precio social del carbono en la red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe (RedSNIP), en la que además de Costa Rica, también participan Chile, Perú, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala. La Red SNIP surgió en 2011 y gracias a ella 19 países intercambian información para la evaluación y gestión de proyectos e información con miras a generar innovaciones sobre los instrumentos de carbono.

Otro reto, según [Marcos Castro](#), del Banco Mundial, es la voluntad política de avanzar con esta agenda para introducir una señal de presión alta en las economías nacionales utilizando diferentes instrumentos. Desde el Banco Mundial –que cuenta con un precio al carbono en un rango de precios que varía entre 40 y 80 dólares por tonelada en el año 2020– también se ha apoyado el esfuerzo de países en la región para desarrollar esquemas domésticos de certificación de carbono y programas nacionales de carbono neutralidad.

De hecho, la red de intercambio de experiencias e instrumentos se ha venido afianzando en los últimos años. Por ejemplo, la Plataforma de Carbono de las Américas es una iniciativa que surgió en 2017 entre Chile, Colombia, Costa Rica y las jurisdicciones de

Quebec en Canadá y California, en los Estados Unidos para intercambiar experiencias entre las regiones que ya cuentan con un precio al carbono. En la COP26, los miembros de la Plataforma hicieron una declaración para renovar el compromiso con estos instrumentos de cara a la recuperación verde tras la pandemia, invitando a países como Perú, Panamá, Argentina, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago a unirse.

MENSAJES CLAVE

- » Aunque aumenta el flujo de finanzas climáticas en la región, las fuentes de financiación deben ser más importantes y más diversas.
- » Los flujos actuales de financiación a los combustibles fósiles deben reconducirse hacia las energías limpias.
- » Todavía la banca regional, así como los bancos centrales tienen una tarea pendiente por incluir de mejor manera los riesgos climáticos en su modelación económica. Algunos bancos ya comienzan a capacitar a sus empleados y clientes para incluir esta perspectiva en la evaluación de sus portafolios y servicios.
- » El sector privado avanza en mejorar sus procesos de eficiencia energética a través de cooperación con aliados europeos para la transferencia tecnológica. Un programa destacado es el Low Carbon Business Action (LCBA) que impulsa la Unión Europea desde el 2020.
- » En América Latina, hay liderazgo de países como Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Argentina y Perú en desarrollar mecanismos para estimular el mercado del carbono y el flujo de finanzas para el clima. Estas herramientas van desde los impuestos al carbono, la inclusión del precio social del carbono en las inversiones públicas, la creación de mapas de riesgos climáticos en el estudio de inversiones gubernamentales hasta el apoyo técnico en la creación de hojas de rutas de descarbonización.
- » Las hojas de rutas sectoriales de descarbonización tienen el potencial de convertirse en instrumentos de largo plazo para que gobiernos y empresas puedan alinearse en las metas nacionales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Costa Rica, Chile y Argentina lideran este trabajo en la región.
- » Solo dos países en la región aplican el precio social del carbono (Chile y Perú), un instrumento que puede guiar la priorización de proyectos bajos en carbono a ser financiados por las inversiones públicas.

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

PAÍSES CITADOS

- » Chile
- » Colombia
- » Perú
- » Costa Rica
- » Brasil
- » Argentina
- » Panamá

HERRAMIENTAS CITADAS

- » Guía de inversiones
- » Mapa nacional de riesgos
- » Precios al carbono
- » Impuestos al carbono
- » Precio social al carbono
- » Taxonomías verdes
- » Hojas de ruta sectoriales
- » Acuerdos voluntarios
- » Acuerdos comerciales
- » Transferencia tecnológica

**COSTA RICA***Hojas de ruta sectoriales de descarbonización*

Delinean acciones por sector basadas en recambio tecnológico y apoyo gubernamental. El gobierno trabaja de la mano con las empresas para presentarles opciones de innovación que contribuyan a su estrategia de negocio al largo plazo a la vez que cumplen con las metas nacionales de mitigación y adaptación.

**COLOMBIA***Impuesto al carbono*

Implementado en 2016 con un precio actual de alrededor de USD 5. Su recaudo ha contribuido a fortalecer otros sectores económicos afines a las metas climáticas del país como el sector forestal.

**PERÚ***Precio social al carbono*

El gobierno adoptó un precio social al carbono como un criterio adicional en la evaluación de proyectos públicos de inversión. Con esto, se da una señal al mercado para promover desarrollos industriales bajos en carbono.

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

**PANAMÁ***Mapa nacional de riesgos climáticos*

Ayuda a identificar los riesgos que enfrentaría cada proyecto de inversión pública. La herramienta permite orientar a tomadores de decisión de diferentes dependencias sobre los impactos posibles del cambio climático.

**COLOMBIA***Taxonomía verde*

Sistema de clasificación de proyectos que contribuyen a los ODS y al Acuerdo de País. Este tipo de guía contribuye a guiar las inversiones del sector privado en las actividades que efectivamente tienen un impacto en la sostenibilidad.

**CHILE***Impuesto al carbono*

Implementado en 2017 con un precio actual de USD 5 y ha recaudado 200 millones de dólares anuales. Se está evaluando su efectividad en incentivar el recambio tecnológico en la industria.

**CHILE***Acuerdos voluntarios de producción limpia*

Más de 191 acuerdos involucrando a 8.600 empresas comprometidas con la producción limpia, la descarbonización y el cumplimiento de los ODS. Estos instrumentos tienen como fin fijar metas y planes de acción en línea con los objetivos nacionales.



MANUEL TRUJILLO

Responsable de Relaciones Internacionales de Barranquilla, Colombia

“Es muy importante empezar a mezclar lo ambiental con lo social y lo económico. Todo tiene que ir de la mano y esa es una gran lección que nos deja este proyecto. Este es un modelo que empodera a la comunidad y que invita a los ciudadanos que viven en ella a que sean parte de este sueño de construir una biodiverciudad”.

3. Ciudades: epicentro de la innovación climática

La región latinoamericana es una de las regiones del mundo **más urbanizada**, con un 81% de la población viviendo en zonas urbanas. Si bien las ciudades son grandes generadoras de productividad, innovación y oportunidades en general, también son grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Las ciudades tienen la gran responsabilidad y la gran oportunidad de reducir sus emisiones y construir resiliencia al cambio climático a la vez que mejoran la calidad de vida y el aire que respiran sus habitantes.

EUROCLIMA+ POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE

La movilidad urbana es uno de los sectores en los que se centra el apoyo que EUROCLIMA+ facilita a sus 18 países socios en América Latina. De los 57 proyectos actualmente en ejecución, 18 son en este ámbito. Hasta ahora, el monto destinado a proyectos de movilidad urbana se eleva a 9,3 millones de euros. Para conocer la ubicación de esos proyectos consulte este [mapa](#). Además, EUROCLIMA+ colabora con iniciativas específicas tales como la MobiliseYourCity, SLOCAT y LEDSLAC para la gestión del conocimiento y el intercambio técnico, y ha creado una [Comunidad de Práctica](#) de movilidad urbana, que permite a distintos actores del sector intercambiar avances, lecciones y aprendizajes en movilidad urbana sostenible.

3.1 De la planeación a la acción: cómo priorizar y financiar las acciones climáticas

Al día de hoy, las ciudades son las mayores fuentes de gases de efecto invernadero y este problema aumentará con la aceleración actual del crecimiento urbano. En 2050, se prevé que el 89% de la población de América Latina viva en zonas urbanas. Según [ONU Hábitat](#), las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para la Unión Europea, de acuerdo con los lineamientos del Pacto Verde, apoyar la acción climática de las ciudades es una prioridad. Durante un evento del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, [Stéphanie Horel](#), oficial de la Unión Europea, reiteró el compromiso de la UE con la agenda climática a nivel internacional, poniendo en relieve la importancia de apoyar el liderazgo de las ciudades latinoamericanas

Sin embargo, para apoyar las ciudades en este proceso, existen dos obstáculos mayores para la acción: la gran heterogeneidad entre las diferentes urbes y las dificultades para acceder a financiación climática.

[Jorge Muñoz Wells](#), alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima y representante para América Latina ante la Junta Directiva del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, subrayó que “es crucial que las entidades financieras y multilaterales brinden oportunidades de financiamiento para iniciativas climáticas y a su vez, permitan el cierre de las brechas entre la

planificación y la implementación de los planes de acción climática, a fin de asegurar una mejor calidad de vida, acceso a viviendas asequibles y servicios básicos esenciales para nuestra población”.

Diferentes organizaciones e iniciativas de cooperación internacionales están tratando de ayudar a las ciudades a eliminar estos obstáculos y cerrar la brecha de la implementación.

Jordan Harris, coordinador para las Américas del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, GCoM Américas, y [Estefani Rondón](#), investigadora de la CEPAL, presentaron el proyecto-piloto “[Análisis cualitativo para acelerar la implementación de los Planes de Acción Climática en América Latina y el Caribe](#)” que busca acelerar la implementación de los planes de acción climática de municipios firmantes del Pacto.

El proyecto ha comenzado analizando los planes climáticos de las ciudades de San José, Quito y Ciudad de México. El objetivo último es generar herramientas y metodologías que ayuden a las ciudades a priorizar medidas de mitigación y adaptación, y a identificar y solicitar fuentes de financiamiento para la implementación.

Así, para analizar los planes de acción se configuraron una serie de indicadores buscando una evaluación holística que no estuviese centrada solamente en las acciones de mitigación y adaptación, sino que ahondara en temas transversales como la gobernanza y participación ciudadana, indicadores socioeconómicos y de gestión ambiental y asuntos de género.

“Los planes de acción climática no son el objetivo final, sino un paso previo para la implementación de acciones de mitigación y adaptación. El objetivo general de este proyecto es apoyar la toma de decisiones sobre acciones prioritarias, así como orientar sobre las opciones de financiamiento disponibles”.

Estefani Rondón

Para llevar a cabo esta transformación de las ciudades se necesita más ayuda financiera exterior y el desarrollo de instrumentos de mercado como los que se están implementando en San José. Se trata de mecanismos de compensación, para tratar de hacer ver a las industrias y a los comercios los beneficios positivos de las acciones climáticas y ambientales.

Otra gran ciudad que ha participado en el piloto del GCoM es la Ciudad de México. Leticia [Gutiérrez Lorandi](#), secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la ciudad, destacó la importancia de contar con un presupuesto de carbono, para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática en 2050.

Entre 2018 y 2024, la ciudad quiere plantar 40 millones de árboles, plantas y arbustos, restaurar 85 kilómetros de ríos vivos y reducir en un 50% los residuos sólidos que van a rellenos sanitarios.

En materia de energías renovables, la Ciudad de México construirá la planta de energía solar más grande dentro en una ciudad sobre el mercado central de abastos. Sobre 25 hectáreas de techo, se instalarán paneles para la generación de 20 Megavatios.

Además, la capital mexicana aplica una perspectiva social integral en las políticas climáticas con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y género y aumentar la inclusión y el respeto de los derechos humanos. Así, por ejemplo, se instalarán 100.000 sistemas de cosecha de agua de lluvia en hogares vulnerables que no tienen acceso al agua, con una perspectiva de género muy importante. Esta iniciativa reduce las brechas de desigualdad al liberar tiempo no remunerado que las mujeres utilizaban para llevar agua a sus casas.

Además del apoyo financiero, los responsables locales demandan una mayor ayuda para generar capacidades en los equipos municipales.

3.2 En urbanismo como en salud, más vale planificar que curar

Las urbes de América Latina están viviendo un “crecimiento descontrolado”, alertó el coordinador de ONU Hábitat Países Andinos, **Roi Chiti**, quien explicó que el ritmo de crecimiento de suelo urbano es desproporcionado ya que está doblando o triplicando el ritmo de crecimiento de la población.

“La enorme huella de carbono creada por las ciudades es en buena parte resultado de una mala planificación y diseño urbano, conectado con la manera con la cual gestionamos y gobernamos nuestras ciudades. Desde hace unas décadas vemos un crecimiento muy acelerado de las ciudades en cuanto a consumo de suelo que no se justifica con el crecimiento de la población”.

Roi Chiti

Este crecimiento descontrolado está invadiendo zonas verdes del entorno de las ciudades que antes actuaban como sumideros de carbono, una herramienta natural crítica para mitigar el cambio climático.

El otro gran problema es el creciente déficit de la mixtura o diversidad en el uso del suelo. Se ha venido produciendo una excesiva especialización de los suelos en el centro de las ciudades donde se concentran las oportunidades productivas y los servicios, frente a los barrios residenciales suburbanos que siguen ampliándose en desconexión con las zonas de trabajo.

El crecimiento no planificado de las ciudades provoca una demanda excesiva de movilidad. Esta necesidad de movilidad se suple a través de medios de transporte que utilizan combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. El resultado es que el transporte está detrás del 46% de las emisiones totales de las ciudades.

Chiti abogó así por una planificación urbana que proporcione modelos de ocupación del suelo

diferentes a los que predominan actualmente y que así, el crecimiento urbano se adapte a las necesidades de las poblaciones.

Se necesita una distribución eficiente y equitativa de los usos urbanos, con una mezcla de usos residenciales, y de servicios públicos y privados, para incrementar la eficiencia energética y hacer un consumo de recursos más responsable.

Según los especialistas, esto se logra apostando por zonas urbanas más compactas y de proximidad, es decir, que los servicios, lugares de producción y ocio estén más cerca de los lugares de residencia para reducir las emisiones asociadas al transporte. Hay que optimizar las inversiones en equipamientos, fomentar las actividades económicas y servicios de proximidad, y mejorar el transporte público.

3.3 Aportando a la mitigación desde la gobernanza multinivel

Innovar para superar los obstáculos a la acción climática es lo que están haciendo numerosas ciudades y regiones de América Latina. Para ser eficaces necesitan avanzar en la coordinación a nivel local, nacional y con las instituciones internacionales en el diseño de políticas públicas de clima integrales.

Diego Aulestia, jefe de la unidad de Asentamientos Humanos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, destacó que “las ciudades tienen grandes dificultades en el acceso al financiamiento” por razones operativas, pero también por “la necesidad de diseñar e implementar una política pública que sea integral y coordinada”. Al respecto, Aulestia afirmó que la región necesita dar grandes avances y que, aunque la situación tiene claroscuros, existen importantes márgenes para avanzar, pero “se necesita una coordinación a nivel local, nacional y por supuesto con las instituciones a nivel internacional”.

En Brasil, por ejemplo, el país de mayor superficie y población de América Latina, con unos 210 millones de habitantes, “es necesaria una mayor integración

en materia climática entre los municipios de la misma región”, resaltó.

Por su parte, **Axel Graef**, alcalde de Niteroi, Brasil, defendió que desde la unidad se puede lograr un mayor apoyo de los organismos financieros.

Augusto Acosa, jefe de Proyecto del City Climate Finance Gap Fund del Banco Europeo de Inversiones (BEI), destacó la importancia de la comunicación y el estar a la escucha de las necesidades de las ciudades para que los bancos de desarrollo internacionales puedan en su trabajo de apoyo al desarrollo actuar como puentes de diálogo nacional entre los gobiernos centrales y los locales.

“Los gobiernos locales no solo son receptores de ayuda internacional, cooperación o financiamiento, sino que realmente son actores de cambio.”

Augusto Acosa

Por otro lado, se insistió en la necesidad de fortalecer los vínculos de las urbes y las zonas rurales a través de un ordenamiento territorial y de una planificación efectiva. El objetivo es reducir la desigualdad territorial y democratizar el acceso a servicios y oportunidades de las poblaciones rurales y reducir con ello el fenómeno de la migración masiva del campo a la ciudad.

Gobernanza multinivel e integradora del campo

Leonardo Orlando, prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Manabí, la tercera más poblada en Ecuador con 1,6 millones de habitantes, subrayó la importancia de esta integración entre el campo y la ciudad.

En apenas tres décadas la población rural de la provincia ha caído del 60% al 41%. El Prefecto subrayó que, si bien la tendencia a la rápida urbanización es mundial e imparable, se puede mitigar “si establecemos adecuados vínculos armónicos entre

lo urbano y lo rural y que el crecimiento económico sea incluyente, que reduzca desigualdades”.

El Prefecto habló de la necesidad de pagar una deuda social con el campo, modernizándolo para que tenga un mayor valor en cuanto a la productividad, la generación de ingreso y la conectividad digital, y aseguró que es necesario que las ciudades acojan en mayor medida actividades del sector primario para mejorar la seguridad alimentaria. El Prefecto destacó el apoyo y la colaboración con las organizaciones multilaterales.

“Estamos trabajando con la FAO, con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, ONU Habitat, OIT, ACNUR. Ahora pretendemos establecer una alianza más estrecha con ONU Mujer y tener una alianza con todo el sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador para convertir a Manabí en un territorio que cumple con los objetivos y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Global 2030”.

Leonardo Orlando

Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional de República Dominicana, subrayó la necesaria articulación entre lo local y lo nacional y pasar de la planificación a la implementación.

“En República Dominicana hemos tenido avances instrumentales más que avances estratégicos, ya que tenemos leyes y normativas muy importantes. Ahora está faltando la otra parte, que es que estas normativas y estas leyes puedan generar bienestar en la gente, que es el fin último”.

Domingo Matías

En cuanto a la descentralización y la colaboración para la acción. Matías lamentó que los procesos de descentralización en América Latina y el reparto de competencias locales y regionales en materia climática sean muy desiguales.

Así, “el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales es fundamental para colocarles en unos niveles de desarrollo que los lleven a tener las capacidades para coordinarse con el Gobierno nacional”, dijo.

Ingrid Zambrano, alcaldesa del cantón de Sucre, Ecuador, destacó la necesidad de innovar en materia de gobernanza y con ese objetivo se ha creado una mancomunidad para lograr las metas climáticas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la Mancomunidad del Pacífico Norte, formada por los cantones de Sucre, San Vicente, Jamey y Pedernales.

“Nosotros estamos pensando no solo como cantón, sino como región, que abarca a 200.000 habitantes. Hemos decidido unirnos en mancomunidad, como una estrategia también para lograr fortalecer algunos planes, programas y proyectos que vayan precisamente a mitigar los impactos del cambio climático”, dijo.

Numerosos participantes en los eventos del Pabellón de EUROCLIMA+ insistieron en la necesidad de reforzar la participación ciudadana activa en el planeamiento e implementación de políticas climáticas.

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, un observatorio que promueve la participación ciudadana, destacó la necesidad de generar evidencias con el apoyo del sector de la investigación y las organizaciones de la sociedad civil sobre qué esperan y demandan los ciudadanos y que estas evidencias sean incorporadas en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

En este sentido, Domingo Matías habló de la necesidad de una planificación democrática para generar contrapesos sociales.

“Los ciudadanos son los que pagan el presupuesto público y por lo tanto su participación es determinante

en la toma de decisiones de lo público. Otro reto importante es que hay que mejorar los sistemas de transparencia y rendición de cuentas. ‘Gastar bien’ para nosotros significa invertir en función de la perspectiva de la gente. El cambio climático es un tema de democracia. El cambio climático es un tema de inclusión social. El cambio climático es un tema de bienestar”, dijo

3.4 Invertir en adaptación, salvaguardar el desarrollo

En lo relativo a la adaptación climática, **Jorge Muñoz Wells**, alcalde de Lima, se refirió a la necesidad de reforzar las acciones de adaptación para salvaguardar los avances de desarrollo.

“No queda duda que el planeta se ha calentado y estamos experimentando lamentablemente los efectos del cambio climático, los cuales se convierten en una amenaza para las iniciativas a favor de la erradicación de la pobreza y la recuperación de esta situación post COVID, en la que todos estamos enfrascados y sobre todo también en una amenaza a la búsqueda de un desarrollo sostenible en los distintos países”.

Jorge Muñoz Wells

Además de a la necesidad de reducir las emisiones, las ciudades tienen que hacer frente a su especial vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Así, por ejemplo, se puso sobre la mesa el dato de que, en los próximos 20 años, las 600 ciudades más grandes del mundo van a sufrir los efectos catastróficos de una subida del nivel del mar de medio metro.

Por otro lado, el cambio climático no está afectando a toda la población de manera equitativa, siendo las comunidades más pobres y vulnerables las más expuestas a sus efectos. Estas poblaciones son las más dependientes de los servicios que proporcionan los ecosistemas. De la misma manera más de

mil millones de personas a día de hoy viven en asentamientos informales, que están más expuestos a los impactos climáticos.

El representante de ONU Habitat **Roi Chiti** explicó que para afrontar el reto del cambio climático es necesaria una triple estrategia de mitigación, adaptación y justicia climática y que la Nueva Agenda Urbana aprobada por los países del mundo en 2016 “nos viene a socorrer” en esa labor, “porque contiene principios y lineamientos para lograr el ODS 11” de promover ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sustentables” dijo.

Un ejemplo de adaptación urbana lo procuró la Ciudad de México. Con casi 1.500 km² de territorio y más de 20 millones de habitantes en su zona metropolitana, la Ciudad de México está trabajando en un plan de adaptación para el largo plazo que acompañe la estrategia de mitigación y que incluye la adaptación de los ecosistemas, con un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. El objetivo, explicó **Leticia Gutiérrez Lorandi**, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, es la adaptación de las comunidades, la preservación de sus medios de vida y la reducción de riesgos de desastres asociados al cambio climático.

Representantes de las ciudades de Barranquilla, Colombia; Belo Horizonte, Brasil; y Hermosillo, México; presentaron sus planes, logros y retos en la implementación de políticas climáticas innovadoras con un enfoque en transición justa y participación inclusiva.

Manuel Trujillo, jefe de Relaciones Internacionales de la ciudad de Barranquilla, que situada en la costa Caribe es una de las urbes más pobladas de Colombia con 1.300.000 habitantes y es la cuarta economía del país sudamericano. En Colombia, el 80% de la población vive en zonas urbanas.

Barranquilla quiere convertirse en la primera ‘biodiversidad’ de Colombia en 2030, regida por un modelo de desarrollo urbano en armonía con la naturaleza. Para lograrlo se ha creado una visión estratégica de desarrollo a largo plazo, al horizonte de 2100 siguiendo el principio de biodiversidad, el que

se basa en la conexión de los ecosistemas urbanos, los actores corresponsables, los entornos naturales, mediante el principio de participación ciudadana y con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible.

Barranquilla se dirige así a un crecimiento urbano ordenado, regido por los principios de sostenibilidad, como es el fomento de la agricultura urbana con huertos y jardines comunitarios. Una de las acciones concretas para llevar a la práctica esa visión de biodiversidad es un proyecto de colaboración con la ciudad de Roma auspiciado por la International Urban and Regional Cooperation (IURC). La ciudad se ha inspirado de los huertos urbanos de Roma, pionera en la agricultura urbana, para poner en marcha un proyecto piloto de huertos urbanos en el barrio Villas de San Pablo, donde vive población vulnerable un 78% de la cual no cuenta con seguridad alimentaria garantizada.

El modelo busca empoderar a la comunidad formándola y dándole los medios para que produzca sus propios alimentos mientras se generan espacios para el intercambio, la cohesión social y el trabajo comunitario.

“Es muy importante empezar a mezclar lo ambiental con lo social y lo económico. Todo tiene que ir de la mano y esa es una gran lección que nos deja este proyecto. Este es un modelo que empodera a la comunidad y que invita a los ciudadanos que viven en ella a que sean parte de este sueño de construir una biodiversidad”.

Manuel Trujillo

La ciudad brasileña de Belo Horizonte con 2,5 millones de habitantes en una región metropolitana de 6 millones es la tercera ciudad más poblada de Brasil y la séptima de América Latina.

A principios de 2020, Belo Horizonte sufrió las peores lluvias de su historia, que provocaron unas pérdidas de vidas y materiales incontables, destruyendo

buena parte de las infraestructuras de la ciudad. “Los impactos del cambio climático se han vuelto cotidianos”, dijo **Hugo Salomão França**, director de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Belo Horizonte.

Ante la ausencia de impacto de los mecanismos existentes para la planificación de políticas climáticas, Belo Horizonte, con el apoyo de IURC decidió iniciar un proyecto de colaboración con la ciudad portuguesa de Almada, en Portugal, para inspirarse de su Plataforma local de Cambio Climático (PLAC) y reformular el Comité de Cambio Climático y Ecoeficiencias de Belo Horizonte. Así, se han venido intercambiando conocimientos y buenas prácticas en lo relativo a los modelos de gestión y gobernanza para acciones de política ambiental. El objetivo de la colaboración es mejorar la resiliencia de la ciudad ante los desastres climáticos y cumplir los objetivos del Acuerdo de París y los ODS.

Los resultados de esta colaboración han sido muy positivos con un aumento significativo de la participación de la sociedad civil, la puesta a disposición de recursos para fomentar actividades a impacto positivo, la creación de una certificación ambiental, presentación de un proyecto de eficiencia energética para obtener financiamiento internacional y la adhesión de la ciudad a la iniciativa de la ONU Race to Zero.

Con casi 1 millón de habitantes y situada en el norte de México en el Desierto de Sonora, Hermosillo es una ciudad que está obligada a adaptarse rápidamente al cambio climático. Está situada en una zona árida pero expuesta a lluvias que pueden ser torrenciales. Por otro lado, la ciudad necesita paliar las altas temperaturas mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Gracias a la cooperación internacional, la ciudad ha elaborado el primer ‘Manual de lineamientos de infraestructura verde’ de Latinoamérica y una ‘norma técnica’ que obliga a su aplicación. El manual contiene ejemplos de aplicaciones urbanas de soluciones basadas en la naturaleza como pueden

ser los techos o las paredes verdes o cubiertos de vegetación, los jardines de lluvia o el asfalto filtrante.

Guadalupe Peñúñuri Soto, directora de RPS Sociedad Creativa y asesora del área del Ayuntamiento de la ciudad de Hermosillo, reivindicó la necesidad de un “abordaje sistémico” en nuestra relación con la naturaleza urbana para planificar e implementar las acciones de mitigación y adaptación. También destacó la necesidad de ahondar en la colaboración porque “hoy más que nunca necesitamos la cooperación internacional para poder dar un ‘salto de rana’ y poder aterrizarlo en acciones específicas en cada una de nuestras ciudades”.

3.5 Transporte y movilidad: ciudades a la vanguardia de la acción

El transporte es uno de los sectores que más emisiones GEI generan a nivel mundial y América Latina y el Caribe no es una excepción. Según **datos** de la CEPAL, un 36% de las emisiones relacionadas con el uso de la energía de la región proviene del transporte.

En América Latina, preocupa especialmente el rápido aumento de la motorización, al ser la región que presenta el mayor crecimiento en la propiedad de vehículos en el mundo, doblando incluso el promedio mundial.

Así, ante la urgencia del problema, la movilidad urbana es una de las áreas de trabajo relevantes del programa EUROCLIMA+, en palabras de **Carles Puigmartí Borrel** de la Unión Europea, porque es uno de los sectores de mayor emisión de gases de efecto invernadero y a la vez uno de los problemas más importantes en la región del mundo más urbanizada como es América Latina.

“Todas las personas que hemos vivido en América Latina hemos sufrido los enormes atascos y el enorme tiempo que se pierde precisamente por los problemas de movilidad urbana, y solucionarlos nos puede generar dos grandes beneficios: la reducción de las emisiones y el dar soluciones

sostenibles a las dificultades de movilidad”, afirmó Puigmartí Borrel.

Según explicó [Carolina Chantrill](#), responsable del Área de Movilidad Urbana Sostenible de la Asociación Sustentar, entre las medidas más comunes sobre movilidad que se encuentran en las CDN, se destacan las relativas a la incorporación de nuevas tecnologías o el uso de energías alternativas. Sin embargo, “estas medidas por sí solas no tienen la capacidad de alcanzar el potencial máximo de reducción de emisiones que se requiere en el sector para poder cumplir con el 1,5°C del Acuerdo de París”, dijo.

“Se deben considerar también estrategias relacionadas con cambiar la manera en que nos movemos y transportamos las cargas y evitar, mediante estrategias de planificación, diseño y digitalización, los viajes innecesarios”, añadió.

Precisamente, sobre digitalización de la movilidad habló [Juan Palacio](#), representante en Latinoamérica de Moovit, una aplicación móvil gratuita con la que los usuarios pueden planificar sus movimientos privilegiando el transporte público y la micromovilidad para reducir las emisiones. Palacio subrayó la necesidad de concebir la movilidad como un servicio para facilitar la intermodalidad y la adaptabilidad de los diferentes modos de transporte a las necesidades específicas de cada usuario, dando visibilidad a alternativas bajas en carbono como es caminar o usar los medios de micromovilidad activa como la bicicleta, o medios eléctricos como el patinete.

Palacio puso como ejemplo la ciudad de Buenos Aires en Argentina, uno de los países de la región con mayor población urbana. Según una encuesta realizada por su firma, 1 de cada 4 usuarios de micromovilidad aseguraba estar motivado en su elección por su conciencia de reducir las emisiones. Esto, para Palacio, demuestra que hay que dar visibilidad, facilitando información a los usuarios sobre el impacto medioambiental de su modo de transporte, porque mediante la información se

concientiza y la concientización es el primer paso para un cambio de hábitos.

Varios expertos sobre movilidad destacaron que la pandemia de Covid-19 ha provocado un descenso en el uso del transporte público que ha sido sustituido por un mayor uso de la bicicleta en algunos casos y del vehículo privado en muchos casos. Sin embargo, se muestra confiado en que gradualmente se puedan recuperar y mejorar los índices de uso del transporte público anteriores a la pandemia.

Precisamente dar visibilidad a las soluciones de movilidad sostenible es el objetivo de Move To Zero-MOVE, una iniciativa del PNUMA para evidenciar los avances en movilidad eléctrica e identificar qué elementos son necesarios para su despliegue definitivo en América Latina y el Caribe. Para [Jone Orbea](#), líder regional de MOVE, “ya existe un ecosistema de la movilidad eléctrica en la región, puesto que es parte del pensamiento, de las estructuras, de la planeación, de las industrias, de los negocios, de prácticamente todos los países, en todos los sectores de América Latina”.

Con más de 2.000 autobuses eléctricos ya circulando por la región (en Europa hay unos 4.500) y con una de las matrices energéticas más limpias del mundo, América Latina y el Caribe están avanzando hacia la electrificación del transporte de manera decidida. La región tiene otros muchos condicionantes favorables para un despliegue rápido de esta tecnología como son la disponibilidad de los minerales necesarios para la producción de baterías y la existencia de fábricas de automóviles que se están diversificando hacia el vehículo eléctrico.

El caso de la ciudad de Bogotá, en Colombia, es particularmente inspirador. “En este momento Bogotá con 1.485 buses eléctricos dentro de su sistema Transmilenio, y Santiago de Chile, son las ciudades fuera de China que tienen las flotas de vehículos eléctricos de transporte público más grandes del mundo. Y esto, yo creo que no mucha gente lo sabe y es fundamental para nosotros

poder contar esta historia”, dijo **Nicolás Estupiñán**, secretario de Movilidad de la capital colombiana, cuyo gobierno se ha comprometido además a no comprar vehículos de gasolina a partir del año 2022.

Una experiencia particular dentro del contexto latinoamericano es Uruguay, cuya matriz energética está dominada por la energía hidráulica, lo que hace que un 98% de su matriz proceda de fuentes renovables. Sin embargo, el sector del transporte requiere de una “segunda transformación energética” en palabras de **Paola Visca**, asesora de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Para llevar a cabo esta transformación y dado que las competencias de movilidad urbana son de las provincias y no del gobierno central, este está llevando a cabo un esfuerzo de concientización para convencer a las autoridades subnacionales de la necesidad de electrificar el transporte.

En Costa Rica, los municipios de Montes de Oca y Curridabat han desarrollado una red de ciclovías que se han convertido en un ejemplo para el resto del país y de la región. **Ana Lucía González**, vicealcaldesa de Montes de Oca, animó a las organizaciones sociales y a los responsables municipales a crear proyectos similares. Cabe destacar que el proyecto de ciclovías fue iniciado por un equipo compuesto integralmente por mujeres, y contó con el apoyo de EUROCLIMA+.

Emperatriz Ordeñana Ayerdis, jefa del Departamento de Servicios Ambientales de la ciudad de San José de Costa Rica, explicó los principales retos a los que se enfrenta su ciudad como son la gestión de los residuos sólidos y la contaminación que provocan los vehículos de motor, todo ello en un contexto de desigualdades sociales y proliferación de asentamientos urbanos irregulares.

Para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, San José está construyendo ciclovías, en varios bulevares principales para que los ciudadanos puedan trasladarse sin vehículo a

motor de un extremo al otro de la ciudad. “Hemos apostado al tema del transporte público, por la descarbonización con la puesta en marcha del tranvía y la integración de San José dentro de un proyecto a nivel nacional de trenes eléctricos”, explicó la responsable costarricense.

Y es que el transporte rodado es la gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades como bien saben los responsables de políticas climáticas en las megaciudades. **Leticia Gutiérrez Lorandi**, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció que la urbe “ha logrado la meta de reducir más de 10 millones de toneladas de CO₂”. En el largo plazo, destacó la importancia de contar con un presupuesto de carbono, para alcanzar el objetivo de llegar a la neutralidad de carbono en 2050.

Además, antes de 2024, tienen el objetivo de poner en funcionamiento 500 trolebuses eléctricos, construir 30 kilómetros de cable bus (un nuevo modo de transporte para la Ciudad de México) e instalar un teleférico para las zonas más alejadas y marginadas de la ciudad.

Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, Ecuador, destacó el principio de la proximidad para mitigar el cambio climático y de manera concreta alabó el concepto de ‘la ciudad de los 15 minutos’ donde los ciudadanos puedan caminar o ir en bicicleta 10 o 15 minutos y tener el 80% de sus necesidades satisfechas. Precisamente para facilitar la movilidad, Cuenca tiene el objetivo de crear 125 kilómetros de ciclovías para 2023.

Justamente, el principio de proximidad y diversificación de los espacios es lo que defiende la organización CREO Antofagasta, la ciudad chilena que, por su geografía con un trazado estrecho y alargado, y por su alta segregación social por barrios ha sido tradicionalmente una “generadora de movilidad privada” en palabras de **Nicolás Sepúlveda**, director ejecutivo de la ONG. Así, en una ciudad de 360.000 habitantes, cada día se registran más de 800.000 viajes, de los cuales el 37% son en vehículo privado, el 34% en

transporte público, el 29% a pie y solo el 1% en bicicleta.

Para reducir el uso de medios de transporte insostenibles, CREO Antofagasta, con el apoyo del programa EUROCLIMA+ a través de su agencia implementadora GIZ, ha elaborado el llamado Plan Maestro y una estrategia de movilidad sostenible integrada para aumentar los kilómetros de ciclovías, fomentar el uso del transporte público, mejorar su conexión con las ciclovías y facilitar la conexión de los barrios de las zonas de los cerros, donde viven las personas con menos recursos, con el centro urbano, que es donde se concentran los servicios. Además, se está fomentando la peatonalización de espacios y el cierre de calles al tráfico rodado para una mayor seguridad de ciclistas y peatones.



Alexandra Cortés, responsable de comunicación de EUROCLIMA+



Imágenes de un día sin autos en la ciudad chilena de Antofagasta/ Crédito: CREO Antofagasta

MENSAJES CLAVE

- » La región de América Latina es una de las más urbanizadas del mundo con el 81% de la población viviendo en zonas urbanas. En 2050 se espera que ese porcentaje sea del 89%.
- » Las ciudades son la principal fuente de emisiones y al aumentar la población urbana rápidamente, crece la urgencia de mitigar las emisiones de las urbes.
- » La alta especialización de los suelos urbanos, con los centros productivos por un lado y los suburbios residenciales por el otro, hace que se requiera mucha energía para movilidad, que las personas pasen mucho tiempo desplazándose y que aumente la contaminación del aire.
- » Hay que reducir la necesidad de desplazarse sobre todo con vehículos privados y de combustión, favoreciendo una mayor densidad de población y una proximidad de las zonas productivas y de servicios.
- » Se necesita un desarrollo urbano más ordenado y con un uso más racional y equilibrado del suelo.
- » Las ciudades tienen una gran dificultad para acceder a financiamiento climático, reclaman más ayudas internacionales y apoyo en la capacitación de su personal.
- » Las cuestiones de gobernanza climática a la hora de planificar e implementar las acciones climáticas requieren de más descentralización, transparencia y capacidad de innovación
- » La región está pisando fuerte en el desarrollo de la movilidad eléctrica y tiene las condiciones para acelerar esta transición y llevarla a escala

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

PAÍSES CITADOS

- » Perú
- » Colombia
- » Ecuador
- » México
- » Brasil
- » República Dominicana
- » Costa Rica
- » Uruguay
- » Argentina
- » Chile

HERRAMIENTAS CITADAS

- » Instrumentos de mercado
- » Presupuestos de carbono
- » Energías renovables
- » Perspectiva social integral
- » Descentralización
- » Innovación en la gobernanza
- » Participación ciudadana
- » Transparencia
- » Rendición de cuentas
- » Soluciones basadas en la naturaleza
- » Agricultura urbana
- » Manual de lineamientos urbanos
- » Digitalización
- » Movilidad eléctrica

**BARRANQUILLA (CO)***Estrategia Biodiversciudad*

En Barranquilla se plantearon un desarrollo a 2100 bajo el principio de planeación en armonía con los entornos urbanos. Promueven prácticas como huertos urbanos, inspirados por ciudades como Roma.

**BELO HORIZONTE (BR)***Hermanamiento climático*

La ciudad brasileña se ha hermanado con la ciudad portuguesa de Almada, para intercambiar buenas prácticas y mejorar su gobernanza climática

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

**CIUDAD DE MÉXICO (ME)***Energía renovable urbana*

Construirá la planta de energía solar más grande dentro en una ciudad sobre el mercado central de abastos. Sobre 25 hectáreas de techo, se instalarán paneles para la generación de 20 Megavatios.

**ECUADOR***Juntos por los ODS*

Los cantones de Sucre, San Vicente, Jamey y Pedernales, que juntos representan a unos 200.000 habitantes, han creado una mancomunidad con el objetivo de colaborar para cumplir los ODS y las metas climáticas.

**ANTOFAGASTA (CL)***Transporte limpio*

La ONG CREO Antofagasta con el apoyo de UEROCLIMA+ están implementando acciones para reducir el uso del vehículo privado, aumentar el uso del transporte público, la bicicleta y los trayectos a pie, mejorando infraestructuras y generando concientización.



SOL ORTIZ GARCÍA

Directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México

“No podemos pensar que vamos a resolver la enorme problemática del cambio climático, sin considerar que también tenemos que solucionar la pérdida de la biodiversidad. Ambos están totalmente vinculados. El cambio climático afecta la diversidad biológica y por lo mismo, si conservamos la diversidad biológica, podemos contribuir (a la acción climática) como parte de estas soluciones basadas en la naturaleza”.

4. Biodiversidad y alimentación: soluciones basadas en la naturaleza

Uno de los motores de la acción climática en América Latina son las acciones enfocadas en proteger, restaurar y manejar sosteniblemente los ecosistemas para que contribuyan a resolver problemáticas como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático o la inseguridad alimentaria e hídrica. En el Pabellón de EUROCLIMA+, se dieron a conocer ejemplos de éxito, oportunidades y retos de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en América Latina.

EUROCLIMA+ POR LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

El sector temático de **Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas** (BBE) junto con la **Producción Resiliente de Alimentos** son campos de trabajo muy relevantes del programa EUROCLIMA+. En estos ámbitos, se están impulsando proyectos innovadores de conservación de los recursos naturales, para aumentar la capacidad de los ecosistemas a secuestrar carbono y que contribuyan a la resiliencia de las personas y de los sistemas alimentarios ante el cambio climático. Se están fortaleciendo las capacidades institucionales y se capitaliza en experiencias exitosas en toda la región. Desde el 2019, se han apoyado nueve proyectos de 12 países por un valor de cerca de 13 millones de euros, y se ha impactado a cerca de más de medio millón de personas entre líderes, autoridades locales, productores y tomadores de decisión, entre otros actores.

4.1 El potencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en América Latina

En el corazón de la acción climática en América Latina están las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Este concepto –cada vez más común en las negociaciones internacionales y en todos los foros sobre el clima– es definido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como aquellas acciones que, basadas en los ecosistemas y sus beneficios, responden a diversos desafíos sociales como la seguridad alimentaria, el riesgo de desastres o el cambio climático. En otras palabras, el término se refiere a acciones de protección, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas que contribuyan a la mitigación y adaptación del clima, y que aporten otros beneficios importantes.

En el Pabellón de EUROCLIMA+ en la COP26, se destacó cómo los países de la región están avanzando para incorporar estas soluciones en la planificación e implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), desarrollando instrumentos de política pública, alianzas regionales para la conservación y proyectos locales de la mano de diferentes actores regionales, nacionales e internacionales.

El reciente estudio “Enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza en las CDN actualizadas de América Latina y el Caribe”, impulsado desde EUROCLIMA+, evidenció que 13 países en la región incluyen explícita o implícitamente a la naturaleza como parte de su acción climática, lo que demuestra una mayor adopción en la región de enfoques de mitigación, adaptación y reducción de desastres basados en los ecosistemas.



Mauricio Luna Rodríguez, asesor regional de GIZ para el programa EUROCLIMA+ y coautor del estudio, apuntó que hasta ahora no se ha detectado que las acciones climáticas previstas vayan en detrimento de la biodiversidad. Sin embargo, puntualizó que falta información de detalle para comprender si las acciones propuestas en las CDN se limitan a “no hacer daño”, o si además contribuyen a la integridad de los ecosistemas.

Otra tendencia positiva en los compromisos de los países, señaló el experto, es la inclusión de los agroecosistemas en los paquetes de medidas como una doble estrategia para favorecer la acción climática y la seguridad alimentaria.

También se han identificado factores habilitadores para el éxito de las SbN en la región, para hacerlas más

viables y eficaces para la adaptación y mitigación al cambio climático. Estos factores son: nuevas políticas públicas, financiamiento, generación de capacidades, producción de información e instrumentos de gestión e investigación.

Durante la sesión mantenida en el Pabellón de EUROCLIMA+, los expertos y expertas destacaron diferentes aspectos positivos de la adopción de soluciones basadas en la naturaleza. **Michel Schlaifer**, asesor técnico de Expertise France, agrupó en cuatro los tipos de ventajas que conllevan las SbN y para cada uno de ellos se dieron ejemplos en diferentes eventos:

1- Su potencial de crear importantes sinergias y conexiones

con las metas de otras convenciones y convenios de Naciones Unidas, tales como la lucha contra la desertificación (CCD), la conservación de la diversidad biológica (CDB), la protección de humedales (Convenio Ramsar) o el marco Sendai para la reducción de riesgos y desastres, así como la Agenda 2030 y los ODS. Por ejemplo, en Cuba, con el apoyo de EUROCLIMA+, desde la dirección de Medio Ambiente del ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), se impulsa un proyecto en el litoral sur de la isla con el fin de mejorar la resiliencia de las comunidades costeras, a través de la reforestación con especies nativas, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático y a la adaptación frente al aumento del nivel del mar. Este tipo de proyecto interconecta compromisos asumidos bajo diferentes acuerdos internacionales.

2- Su estrecha interrelación con la conservación de la biodiversidad.

Las acciones basadas en la naturaleza representan beneficios para fomentar la protección de especies en peligro de extinción, el manejo sostenible y local de fauna y flora vulnerables, y la conservación de áreas clave para la diversidad terrestre, marina, dulceacuícola y microbiana.

En México, en el marco de un proyecto implementado con el apoyo de EUROCLIMA+, se

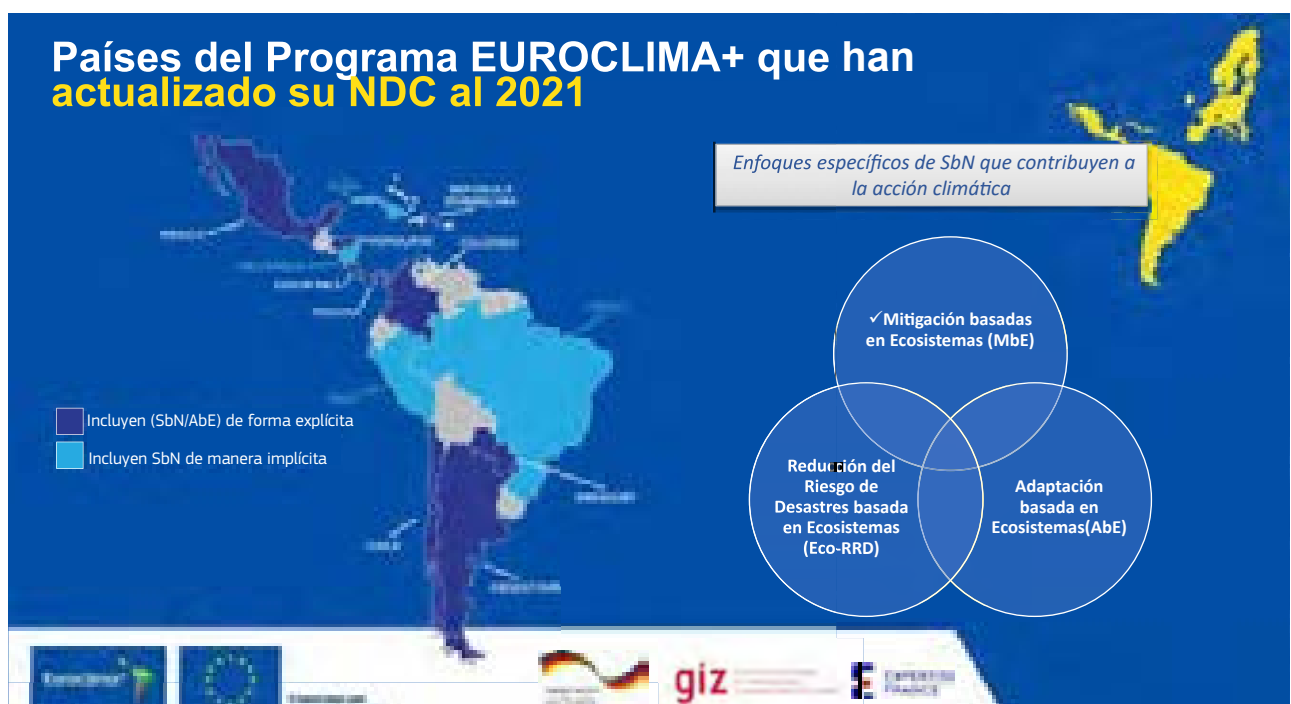
han hecho esfuerzos para integrar elementos de biodiversidad dentro de sus políticas y programas de gestión de los sectores productivos. Desde el grupo de conservación ambiental Pronatura México, establecieron un modelo de incidencia que se compone de cuatro ejes: el fortalecimiento institucional y la gobernanza de los bienes y los servicios ecosistémicos; las soluciones basadas en la naturaleza, con enfoque de medios de vida; el desarrollo de capacidades para la movilización y empoderamiento de grupos vulnerables; y la articulación de las agendas globales desde lo local para el cumplimiento de las metas nacionales.

Los estados de Jalisco y Oaxaca han desarrollado por su parte una planeación territorial para impulsar la conservación y la restauración de los ecosistemas trabajando de la mano con productores de agave para el tequila. Estos dos casos se presentan en detalle en la siguiente subsección.

3- La amplia diversidad de actores que pueden congregar. El diseño de SbN implica agrupar a diferentes actores comunitarios, gubernamentales y privados de sectores diversos como el agropecuario, el forestal, el hídrico, o el turismo. En este sentido, **Ricardo Ulate**, asesor de la delegación de Costa Rica, en representación

de la ministra de Ambiente y Energía de este país, enfatizó que desde hace varios años su país viene entrelazando las agendas de agua, energía, biodiversidad y bosques. En un esfuerzo reciente, en la actualización de la CDN y la construcción del Plan Nacional de Descarbonización -dos instrumentos de política esenciales para guiar el trabajo con SbN- se logró identificar 13 sectores clave para el país y tres de ellos, especialmente importantes para el sector 'naturaleza': ordenamiento territorial; forestal y biodiversidad; y aguas y océanos. De la mano con estos grupos de actores, se integraron las iniciativas para desarrollar SbN, y establecer un sistema de monitoreo de indicadores y avances que les permita hacer seguimiento de su cumplimiento.

Otro ejemplo de coordinación multinivel fue el presentado por el programa 'Nuestra Tierra, nuestros bosques', de ICCO Cooperación, que se desarrolla en El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras con el apoyo de EUROCLIMA+. Durante la COP26 se compartió específicamente la experiencia de El Salvador, donde el proyecto combina sistemas agroforestales con generación de créditos de carbono en parcelas de tierras forestales degradadas de pequeños y medianos propietarios. Además, el proyecto se implementa mediante un diálogo



participativo entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los propietarios de tierras o de parcelas a reforestar. Para **Natalia González**, coordinadora del Bosques & Clima de ICCO Colombia, hay dos elementos clave para considerar: el primero es tener una visión de largo plazo desde la planeación, que contemple monitoreo y seguimiento; y el segundo es que estas iniciativas deben traer beneficios reales a las comunidades para lograr su credibilidad y compromiso, y que, al mismo tiempo, puedan generar ingresos.

4-El enfoque territorial y sistémico en su diseño. Construir acciones que generen beneficios sociales a partir de la naturaleza requiere pensar de una manera sistémica los aspectos tecnológicos, económicos, sociales y ambientales de los territorios. Eso, a su vez, implica apuestas complejas y regionales que pueden dar frutos a gran escala. Por ejemplo, permite estrategias más allá de las fronteras convencionales de planeación. Es el caso de la cuenca de Madre de Dios, entre Bolivia y Perú, en el pleno corazón amazónico, uno de los sitios más biodiversos del planeta, a través de programas comunitarios de manejo de recursos no maderables, como la castaña amazónica, se está evitando la deforestación de la selva. El proyecto Bosques Amazónicos y Cambio Climático, apoyado por EUROCLIMA+, logra que más de 90.000 personas –la mayoría de ellas indígenas y campesinas– se vinculen a este aprovechamiento sostenible que impide la rápida transformación negativa de las selvas amazónicas. **Luis Arteaga**, director Técnico en Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino Amazónicos (ACEAA), enfatizó que el proyecto quiere demostrar “la posibilidad de generar sinergias de mitigación y adaptación a partir del impulso de emprendimientos de manejo de recursos no maderables con un enfoque comunitario”.

En Centroamérica también hay planes en este sentido, como la iniciativa Cinco Grandes

Bosques de Mesoamérica, que busca proteger estos ecosistemas transfronterizos que cubren cerca de 120.000 km² y almacenan el 47% de las reservas de carbono forestal de la región, debido a que su tamaño se ha reducido más del 23% a causa de la deforestación ocasionada por la ganadería ilegal. En ella se articulan los ocho países de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), Wildlife Conservation Society (WCS) y Re:wild, y es apoyada por la Unión Europea por medio de un proyecto DeSIRA. La iniciativa parte de los principios de que son un movimiento que trabaja bajo una sola visión; aborda la amenaza principal que es la explotación ganadera, por medio de incentivos para asegurar que haya más árboles y menos ganado vacuno; y promueve el liderazgo comunitario indígena y la búsqueda de soluciones locales.

“Los ecosistemas transfronterizos son puntos críticos de biodiversidad y albergan especies insustituibles como el jaguar y la guacamaya roja. Son esenciales para mitigar el cambio climático en tanto absorben hasta el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y son igual de importante para la adaptación al cambio climático”.

Felice Zaccheo

4.2 Integración de la biodiversidad en la acción climática

Un mensaje contundente durante la COP26 fue la inseparable relación entre la acción climática y los esfuerzos por combatir la pérdida de biodiversidad. Ambos retos socioambientales son parte de una misma problemática y solución. Las acciones que protegen la diversidad biológica contribuyen a la acción climática. De igual manera, trabajar por un planeta en el que el aumento de la temperatura media global no sobrepase los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, también

contribuye a evitar el colapso de numerosísimas poblaciones de fauna y flora.

En el Pabellón de EUROCLIMA+, especialistas de México detallaron cómo están entrelazando estos dos objetivos globales en sus políticas públicas y proyectos. **Sol Ortiz García**, directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, destacó que su estrategia se basa en un enfoque sistémico donde se integran las agendas de cambio climático, de la Convención de Diversidad Biológica, la Agenda 2030 y la lucha contra la desertificación, porque las acciones tienen un multipropósito y un efecto multiplicador de esfuerzos.

Así, México está implementando acciones nacionales y regionales con un doble propósito de conservación de la diversidad y acción climática. En el ámbito nacional, por ejemplo, han desarrollado el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, con el que por medio de redes de trabajos en los sectores agrícola, pecuario, acuático y de microbianos e invertebrados, se han podido conocer y mejorar las prácticas alrededor de aquellos recursos genéticos que contribuyen a la adaptación al cambio climático. Es el caso de los bancos de germoplasma o bancos de semillas que disponen de material para las redes locales de agricultores y compilan semillas de cerca de 1.300 especies de plantas importantes para la agricultura y la alimentación.

“No podemos pensar que vamos a resolver la enorme problemática del cambio climático, sin considerar que también tenemos que solucionar la pérdida de la biodiversidad. Ambos están totalmente vinculados. El cambio climático afecta la diversidad biológica y por lo mismo, si conservamos la diversidad biológica, podemos contribuir (a la acción climática) como parte de estas soluciones basadas en la naturaleza”.

Sol Ortiz García

De otro lado, los gobiernos de los estados de Jalisco y Oaxaca explicaron en el Pabellón de EUROCLIMA+, el esfuerzo de planeación territorial que están haciendo para conectar la biodiversidad con la acción climática:

- En Jalisco, un estado con el 80% de los tipos de vegetación registrados para México e importantes cadenas productivas como el aguacate, la carne de res y el agave para la producción de tequila, se ha trabajado conjuntamente para que la política de ‘Jalisco con Bosques’ integre aspectos de las estrategias generales de lucha contra la deforestación y protección de la biodiversidad. El instrumento –que implica varios aspectos de gobernanza desde la restauración productiva hasta el monitoreo de la tala de bosque natural– ha fortalecido la relación con el sector privado mediante la elaboración de certificaciones con las que se pueda verificar por parte del Consejo Regulador del Tequila la trazabilidad del agave del que sale el tequila que se comercializa.
- En Oaxaca, un estado de gran diversidad biológica y cultural con cerca de 12.500 especies y 15 grupos indígenas y afromexicanos, el 83% de los municipios tiene un riesgo alto o muy alto de sufrir eventos climáticos extremos. Por eso, y con el apoyo de EUROCLIMA+, se ha trabajado por integrar instrumentos del ordenamiento ecológico y social para aunar fuerzas multisectoriales que ayuden a reducir la pobreza al mismo tiempo que contribuyan a la restauración de áreas degradadas. Para eso, se diagnosticó el nivel de degradación ambiental del estado, que logró estimar un potencial de restauración de cerca de 1,4 millones de hectáreas a través de modelos de restauración con actividades productivas como el cultivo de milpa, café y agave y de la ganadería.

Las experiencias mexicanas han puesto de manifiesto los siguientes retos para la integración de la protección de la biodiversidad, el mejoramiento de los medios de vida y la acción climática:

- Coordinación institucional y presupuestal entre diferentes dependencias del Estado. Los marcos legales, que limitan las funciones de diferentes instituciones dentro del Estado, hacen que exista una competencia intrínseca lo que genera dificultades para ver las sinergias entre sus respectivos planes y actuaciones en los territorios.
- Vinculación del sector privado. En ambos proyectos –en Jalisco y Oaxaca– las instituciones se mostraron abiertas a entender cómo apalancar alianzas fructíferas con el sector empresarial de manera que exista una trazabilidad de sus productos y un compromiso con prácticas restaurativas y protectoras de la biodiversidad.
- Contexto de los productores locales. El impulsar políticas que van a implicar cambios en las tecnologías, insumos y realidades de los pequeños productores, necesita ver cuáles son las necesidades económicas y sociales que tal transición va a generar. Si esos elementos no se prevén, se corre el riesgo de exigirle a los productores que produzcan de manera más eficiente y sustentable sin entender cuáles son los apoyos que necesitan para ese cambio.

Al igual que en el caso de México, en otras sesiones del pabellón, se dio a conocer el trabajo que se viene realizando en otros países a favor de la biodiversidad. Por ejemplo, en Brasil la Asociación Nacional de Municipios y Medio Ambiente (ANAMMA), implementa medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), a través de políticas públicas participativas, que tienen en cuenta la biodiversidad. También financia sus acciones con apoyo del sector privado, gobiernos subnacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Mariana Gianiaki, directora del proyecto Articulando Agendas Globales desde lo Local en Brasil, implementado con el apoyo de EUROCLIMA+, explicó que ya cuentan con la Ley de la Mata Atlántica que establece la necesidad de que los municipios y gobiernos locales tengan su propia agenda para

ayudar a la planificación de la biodiversidad. Los beneficiarios directos de estas acciones son los pueblos indígenas y los pequeños propietarios que se encuentran en zonas prioritarias para la restauración.

4.3 Movilizando finanzas para la naturaleza

Prever una financiación sostenida en el largo plazo para las soluciones basadas en la naturaleza es uno de los retos principales a la hora de diseñar dichas soluciones. Desde las políticas públicas, países como Costa Rica han buscado construir mecanismos voluntarios de participación del sector privado, pero también hay otros incentivos desde las empresas y la cooperación internacional que buscan diseñar los mejores mecanismos para dar viabilidad a este tipo de acciones climáticas.

Por ejemplo, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) viene trabajando en Centroamérica para analizar cómo debieran estructurarse los mecanismos financieros según el contexto local. En Honduras, identificaron 44 barreras –que tras ser priorizadas– se pudo entender el peso que tenía la percepción de riesgo de la banca para este tipo de proyectos. Por eso, se decidió trabajar con un fondo de garantías que comparte el riesgo con la banca, lo que genera mayor confianza a quienes invierten en estas iniciativas rurales.

Gracia Lanza, coordinadora de la Unidad de Economía Ambiente y Agronegocios Sostenibles de CATIE, explicó tres lecciones aprendidas de la experiencia hondureña. Por un lado, que se hace muy necesario estimular la demanda del mercado para que los productos derivados de las SbN sí tengan un mercado en el cual puedan funcionar. Un segundo punto, es que hay que tener claridad con los inversionistas sobre las expectativas alrededor de estos proyectos, porque en el sector agrícola, por ejemplo, no se logran resultados inmediatos, sino que estos requieren de varios años. Por último, Lanza llamó la atención sobre la persistente falta de mayor evidencia científica que demuestre los beneficios económicos y sociales de las SbN, y de la necesidad

de que haya una convicción sobre la necesidad del cambio por parte de los inversionistas “para que haya un avance así aunque sea con información imperfecta”, anotó.

En Mato Grosso, Brasil, un innovador mecanismo denominado CONSERV garantiza ingresos a los productores rurales por conservar los árboles en pie dentro de sus predios privados. Se trata de contratos voluntarios y pueden ser reevaluado por los propietarios, según consideren. Además de generar un beneficio de captura de carbono, el proyecto busca mostrar las ventajas que mantener en pie estos tramos de vegetación natural tienen para la misma producción agropecuaria y para la regulación de los ciclos del agua.

Además de atraer financiación para las acciones de mitigación, también hay una necesidad por canalizar recursos para la adaptación basada en los ecosistemas. CATIE junto con otras organizaciones como WRI han llevado a cabo diferentes estudios al respecto en Centroamérica. La región es una de las zonas más vulnerables a eventos extremos como huracanes, especialmente en el Golfo de Honduras. El aumento de estos eventos, que desencadenan más lluvias, deslizamientos e inundaciones, implica costos extraordinarios para los países. Además, a eso se le suma la pérdida de cobertura vegetal que se viene dando en las zonas de cuenca alta de los ríos de la región.

Walter Vergara, director de la iniciativa 20x20 de WRI, señaló que, ante el escenario de riesgo climático para la región, se está buscando cómo responder desde las SbN. Dentro de su análisis, las SbN resultan muchísimo más económicas que las soluciones de ingeniería. Por ejemplo, en vez de crear barreras físicas artificiales, se pueden restaurar humedales para responder al aumento del nivel del mar o se pueden reforzar sistemas agroforestales que ayuden a disminuir la escorrentía y así reducir el riesgo de deslizamientos de terreno. Estas acciones ayudan a que se minimicen los riesgos y gastos que debe asumir la banca, las aseguradoras y los gobiernos en el momento de responder a estos eventos. Por eso, el experto insistió en la necesidad de analizar

los beneficios de la adaptación con medidas basadas en la naturaleza para poder señalar los incentivos financieros que se requieren para su implementación.

A propósito del rol de la banca regional en impulsar las SbN, en el Pabellón de EUROCLIMA+, se dieron a conocer iniciativas para dirigir flujos financieros hacia estas iniciativas. El Banco Centroamericano de Integración Económica destacó que desde 2016 han invertido 6.900 millones de dólares en el financiamiento de operaciones que contribuyen a atacar los efectos del cambio climático en la región. Para eso, el banco tiene tres mecanismos: financiar directamente estas actividades, participar como parte en los procesos de acreditación de otros fondos como el Fondo Verde para el Clima, e impulsar la emisión de bonos de carbono y sociales.

Otro caso es el de Banco de Desarrollo Rural de Guatemala, que tiene en cuenta tres factores en sus operaciones: desarrollo sostenible, mitigación y adaptación al clima. Estos tres funcionan bajo el marco de una política ambiental del banco, que promueve también políticas internas medioambientales. **Bernardo López**, presidente del Consejo Administrativo de Banrural de Guatemala, explicó que una experiencia de financiación reciente ha sido la consolidación de un proyecto REDD+ en el Caribe guatemalteco, donde se apoyan acciones de protección de bosques, asistencia técnica de comunidades locales, legalización de tierras indígenas, programas de salud de mujeres y estudios de biodiversidad y monitoreo de carbono.

4.4 Transformación de los sistemas agroalimentarios

En América Latina, la agricultura representa el 27% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, mientras que a nivel global representa el 11%. Brasil es el principal emisor, seguido de Argentina, México y Colombia. Esto hace urgente transformar los sistemas alimentarios de la región, con el fin de alcanzar la neutralidad en carbono y de profundizar las experiencias de recuperación del suelo como sumidero de emisiones. En Europa ya hay

iniciativas en este sentido, como la estrategia From Farm to Fork, que se enmarca en el Pacto Verde y con la cual la Unión Europea apoya las buenas prácticas de producción resiliente de alimentos, así como la creación de empleos, la preservación de recursos naturales, la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Claudia Martínez, directora de Food and Land-Use Coalition (FOLU) Colombia, presentó el informe **10 transiciones críticas para transformar la alimentación y el uso del suelo** poniendo el foco en los costos ocultos de los sistemas globales de alimentación y uso del suelo. Según sus estimaciones estos sistemas cuestan USD\$12 billones, mientras que solo producen USD\$3 billones, es decir, que cuestan más de lo que producen.

Los costos o externalidades de estos sistemas derivan de sus consecuencias para la salud, el ambiente y la economía. En buena medida provienen del uso de pesticidas y fertilizantes, que representan gran parte de las emisiones. “Lamentablemente, para producir más, lo que estamos haciendo es envenenar nuestros cuerpos y envenenar los ecosistemas”, argumentó Martínez. A esas externalidades hay que sumar las emisiones producidas por el desperdicio de alimentos. Para contrarrestar esta situación, FOLU promueven la agricultura productiva y regenerativa, la construcción de una red de regeneradores del planeta y el uso de bioinsumos.

Para **Eduard Muller**, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional y director de Costa Rica Regenerativa, a través de la agricultura regenerativa y la ganadería holística se pueden revertir los daños en la biodiversidad. Para demostrarlo, contó que, en Guanacaste, provincia al noroeste de Costa Rica, comenzaron en la pandemia un proyecto en el que las comunidades están produciendo 10 toneladas de alimentos saludables por mes en una hectárea. Los resultados en solo tres meses fueron muy satisfactorios, ya que se recuperaron 78 especies de insectos y artrópodos; se mantuvo la cobertura vegetal, se recuperó agua y se están acercando al objetivo de que el riego no sea necesario.

“Solo con convertir la ganadería en ganadería regenerativa, estaríamos fijando más carbono que el liberado por toda la economía y un poco más. Y si le agregamos agricultura regenerativa, estamos hablando de otras 12 giga toneladas (de almacenamiento)”.

Eduard Muller

Desde Cuba, **Leidy Casimiro**, del Instituto Vermont para el Caribe, señaló el potencial de la agroecología en la agricultura familiar porque permite la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras, desde una producción endógena y un uso más eficiente de los recursos locales disponibles, sin requerir grandes cantidades de insumos externos para la producción y comercialización. Según Casimiro, “las fincas que están en transición agroecológica alimentan a más de ocho personas por hectárea al año, tanto en producción de energía como de proteína”.

Por su parte, **María Teresa García**, coordinadora de Mujeres Rurales, explicó que los impactos de la crisis climática sobre la vida de las mujeres rurales, indígenas y campesinas de Centroamérica han sido fuertes. 300 socias de las cooperativas perdieron sus cultivos, las semillas criollas y sus ingresos, lo que se traduce en problemas alimentarios. Para fortalecer su resiliencia, desde el 2011 impulsan la agroecología y la agricultura indígena, a través de la cosecha de agua y elaboración de fertilizantes y compost, para sanar la tierra y potenciar la biodiversidad.

Un elemento clave para promover estas iniciativas de acción climática es el financiamiento a través de una planificación eficaz y multinivel. Una muestra de esta cooperación la aportó la agencia de cooperación de los Países Bajos SNV y sus socios en América Latina al **compartir** casos de éxito en Honduras, Guatemala, Colombia y Ecuador. Cabe destacar que se presentó un proyecto apoyado por EUROCLIMA+ de agricultura familiar climáticamente inteligente en Honduras. El Proyecto Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente para la Producción Resiliente de

Alimentos (AFCl-PRA) viene fomentando la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables y es un ejemplo de buenas prácticas escalable en el ámbito nacional.

Seguridad alimentaria

Fueron numerosas las experiencias presentadas en el pabellón que combinan adaptación y mitigación desde el sector agropecuario. **Carolina Reyes**, coordinadora del Departamento de Proyectos de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica, dio detalles del proyecto Adapta2, que fomenta una estrategia de ganadería baja en emisiones de carbono, gracias a la cual se implementan medidas de adaptación en 650 fincas, a través de acciones como bancos forrajeros y ensillaje, razas adaptadas, pastoreo racional, sistemas agro-silvopastoriles, pastos mejorados, uso racional de purines, uso eficiente del agua y protección de fuentes de agua.

Gracias al proyecto se han implementado medidas de adaptación en más de 2.100 hectáreas de terreno, se han aplicado más de 50 tecnologías de adaptación al cambio climático, se ha logrado un aumento de rentabilidad entre el 10 y el 11%, y se han protegido riberas de ríos y riachuelos. También se ha facilitado capacitación para 5.000 personas. Por otro lado, Fundecooperación creó las líneas de crédito 'agricultura proclima' y 'ganadería proclima', gracias a las cuales más de 70 productores tienen acceso a créditos.

Otro proyecto compartido en el Pabellón fue el de medidas de adaptación al cambio climático para la cría de una ganadería sostenible en Panamá, presentado por **Ima Ávila**, directora del Grupo de Educación y Manejo Ambiental Sostenible (Gemas). La iniciativa ha logrado establecer sistemas silvopastoriles en 600 hectáreas, con la participación de 120 productores, para disminuir la vulnerabilidad climática, en la cuenca media y baja del río Santa María. Diseñaron e implementaron planes de manejo de finca y capacitaron a 80 técnicos y 120 productores con el apoyo de especialistas del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV).

El último proyecto, 'Prácticas con soluciones basadas en la naturaleza', fue introducido por **Janeth Sierra**, secretaria técnica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá. La iniciativa cubre 200 hectáreas de sistemas agroforestales y de conservación de suelos con café bajo sombra, en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Santa María. Gracias al proyecto se ha capacitado a productores y técnicos en comunidades inaccesibles, se han restaurado paisajes agrícolas, se han rescatado especies nativas y se ha implementado un proyecto de producción y comercialización de orquídeas con enfoque de género y se han realizado talleres sobre cambio climático.

En el evento 'América Latina busca financiamiento para la transformación resiliente al clima de su sector agropecuario', se presentaron las experiencias de cuatro países. Bolivia tiene como objetivo mejorar las capacidades de resiliencia de las familias rurales en cinco departamentos del país; Chile tiene como objetivo aumentar la resiliencia de las comunidades humanas y ecológicas y la seguridad alimentaria; Costa Rica tiene como meta fortalecer la capacidad adaptativa de los medios de vida de las personas productoras y la cadena de valor, para contribuir a la seguridad alimentaria; y Panamá busca aportar a la seguridad alimentaria y transformar la actividad ganadera para hacerla más competitiva y resiliente.

La transición hacia la neutralidad en carbono del sector AFOLU

Además de proyectos locales, algunos países han desarrollado macroanálisis de cómo reformar todo su sistema de producción de alimentos. En Argentina gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el sector AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra). Es por esto que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Fundación Avina y la Fundación Bariloche, tres instituciones del país que forman parte de los proyectos internacionales SPIPA (Implementación del Acuerdo de París), FABLE (Alimentación, Agricultura, Biodiversidad, Uso de la Tierra y Energía) y NATUREMAP (Protección de la Biodiversidad, el Carbono y el Agua), decidieron



Participante en un evento en el Pabellón de EUROCLIMA+

unir sus fuerzas para la modelación y desarrollo de trayectorias hacia la carbono-neutralidad del sector AFOLU.

Federico Frank, investigador del INTA, explicó que han integrado varios modelos como son Business as Usual (BAU), Fable Calculator y el modelo Dinámica EGO. Además, como las metas de mitigación deben ser compatibles con las metas de conservación de las fuentes de agua pura y la biodiversidad, y la producción y exportación de alimentos, al modelado resultante han sumado el uso de los algoritmos de **Nature Map a escala nacional**.

Otra de las fases del proyecto fue un diálogo sobre las percepciones de los actores del sector agro y bosques, para analizar los principales desafíos y condiciones para alcanzar la neutralidad de carbono. **Verónica Gutman**, consultora de la Fundación Avina, institución que estuvo a cargo del proceso, enumeró los desafíos que encontraron: i) las urgencias macroeconómicas de corto plazo que enfrenta Argentina, ii) la necesidad de una mayor coordinación entre las políticas climáticas y energéticas, de

transporte, agroindustriales, económicas, financieras, sociales y territoriales, iii) definir una hoja de ruta con metas concretas que sea aceptable por todos los actores del sector.

Finalmente, **Jose Volante**, coordinador del Programa Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA, concluyó que, desde el punto de vista biofísico, sí es posible llegar a la carbono neutralidad en Argentina, pero se debe tener en cuenta: i) recuperar y aumentar la superficie de bosques nativos en un 11%, ii) triplicar la superficie de bosques cultivados; aumentar la producción agropecuaria sin expansión, iii) aumentar la superficie de áreas protegidas en un 30% como mínimo.

MENSAJES CLAVE

- » En América Latina las emisiones provenientes de la agricultura y el uso del suelo representa el 27% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, mientras que a nivel global representa el 11%.
- » Es urgente la transformación de los sistemas alimentarios, a través de la implementación de modelos de agricultura y ganadería regenerativas, así como de modelos agroecológicos, con el fin de alcanzar la neutralidad en carbono y profundizar las experiencias de recuperación del suelo como sumidero de emisiones.
- » La mayoría de países que han actualizado su CDN en la región explícita o implícitamente incluyen soluciones basadas en la naturaleza para el cumplimiento de sus objetivos climáticos.
- » En la región, el diseño de las SbN integra el cumplimiento de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la Convención por la Diversidad Biológica, así como otros marcos y compromisos internacionales.
- » El potencial de las SbN radica en su poder para crear importantes sinergias y cooperaciones económicas, su estrecha interrelación con la conservación de la biodiversidad, la amplia diversidad de actores que pueden congregarse y el enfoque territorial y sistémico en su diseño e implementación.
- » El financiamiento de las SbN requiere un compromiso de los inversionistas, banca regional y tomadores de decisiones que puedan reducir las percepciones de riesgo que este tipo de proyectos todavía acarrear.
- » Canalizar recursos hacia las soluciones basadas en la naturaleza, tanto para mitigación como para adaptación, puede generar la creación de empleos verdes, la conservación de la biodiversidad y la minimización del riesgo por eventos climáticos extremos.

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

PAÍSES CITADOS

- » Perú
- » Colombia
- » Ecuador
- » México
- » Brasil
- » República Dominicana
- » Costa Rica
- » Uruguay
- » Argentina
- » Chile

HERRAMIENTAS CITADAS

- » Instrumentos de mercado
- » Presupuestos de carbono
- » Energías renovables
- » Perspectiva social integral
- » Descentralización
- » Innovación en la gobernanza
- » Participación ciudadana
- » Transparencia
- » Rendición de cuentas
- » Soluciones basadas en la naturaleza
- » Agricultura urbana
- » Manual de lineamientos urbanos
- » Digitalización
- » Movilidad eléctrica



MÉXICO •

Políticas públicas subnacionales

El programa Jalisco con Bosques ha contribuido a mejorar la trazabilidad del sector del agave y la producción de tequila, gracias a alternativas productivas para la restauración de ecosistemas degradados.



MÉXICO •

Políticas públicas subnacionales

La mesa intersectorial de Oaxaca logró sumar esfuerzos para identificar el potencial de restauración de cerca de 1,4 millones de hectáreas siguiendo principios sociales, económicos y ambientales para generar un desarrollo rural sostenible y bajo en carbono.

CENTROAMÉRICA •

Red regional para la conservación

El movimiento Cinco Grandes Bosques de Mesoamérica busca proteger estos ecosistemas transfronterizos que guardan el 47% de las reservas de carbono forestal de la región. En un trabajo de cooperación regional, busca mejorar la gobernanza forestal y destacar los conocimientos locales para la protección de la selva.

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

**CUBA***Resiliencia y adaptación al cambio climático*

En seis municipios costeros en las provincias Artemisa y Mayabeque, regiones afectadas por la pérdida de la línea de costa y de la soberanía alimentaria, se establecieron grupos de voluntarios y alternativas productivas para darle respuesta a estas dos problemáticas.

**ARGENTINA***Modelación a escala nacional*

Con base en modelación, se está trabajando por establecer trayectorias hacia la carbono neutralidad del sector de de la agricultura, silvicultura y otros usos la tierra para todo el país. Se espera que este instrumento guíe la toma de decisiones de las próximas décadas.



FÁTIMA ANDRADE

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

“Poner en valor el conocimiento y los saberes ancestrales que tienen los pueblos indígenas sobre la vida, visibilizarlos y valorarlos económica y socialmente es clave y por ello abordar este reto requiere no dejar a nadie atrás. Y es más que nunca un tema de justicia social, ambiental y económica”.

5. Transición justa y participación

Para asegurar que la transición hacia sociedades y sistemas de producción más resilientes y bajos en emisiones sea justa, es crucial la participación de todos los sectores sociales. Por esto, para los países latinoamericanos es necesario adoptar un enfoque inclusivo que tenga en cuenta a todos y a todas y que fomente la participación con el refuerzo de la educación, la información y una toma de decisiones participativa. En la COP26 se identificaron los principales retos y oportunidades para lograr una transición justa en América Latina y se compartieron las estrategias para que la adaptación y mitigación del cambio climático no dejen a nadie atrás.

EUROCLIMA+ POR LA ACCIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO CLIMÁTICO

Esta línea de acción prioritaria de EUROCLIMA+ está enfocada en fortalecer la educación, el acceso público a la información, la participación ciudadana, la cooperación internacional y la sensibilización social sobre el cambio climático, como elementos indispensables para la implementación de procesos de capacitación y fortalecimientos políticos y sociales sobre competencias climáticas. Además, el artículo 12 del Acuerdo de París reconoce que mejorar la participación y la educación es clave para promover transformaciones en los estilos de vida y comportamientos que fomentan sociedades y economías bajas en emisiones. [Conozca](#) más sobre el trabajo de EUROCLIMA+ en ACE (Acción por el Empoderamiento Climático, por sus siglas en inglés).

EUROCLIMA+ POR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES

La inclusión de la perspectiva de género y la participación de grupos vulnerables, pueblos indígenas y comunidades locales es una importante línea de acción transversal de EUROCLIMA+. Desde esta perspectiva, el Programa trabaja junto a los países latinoamericanos para apoyar su integración en políticas, planes de acción y otras medidas relacionadas con las CDN. [Conozca](#) las acciones que impulsa este programa de la Unión Europea de la mano con los países de la región.

5.1 Empoderamiento y justicia climática

Frente a la urgencia de actuar en la mitigación y la adaptación al cambio climático, los países de América Latina son conscientes de la necesidad de incluir a todos y a todas en la acción. Para ello, se están desarrollando estrategias nacionales de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), como parte de las CDN. Para poner en común las diferentes experiencias en la elaboración de estas estrategias, el Pabellón de EUROCLIMA+ reunió a expertos y expertas de la región que compartieron aprendizajes, retos y metas.

En 2010, Colombia fue uno de los primeros países que planteó una estrategia nacional de ACE y ya la ha implementado y está evaluando su impacto. [Jairo Neftalí Cárdenas](#), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que el país tiene como metas actualizar la política de educación

ambiental para incluir el cambio climático como un mensaje de urgencia; incorporar la educación en los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS); y construir el Sistema Nacional de Información en Cambio Climático a 2030.

En 2020, Uruguay inició el proceso participativo para la elaboración de su Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (ENACE) que a cierre de este estudio se encuentra en proceso final de consulta pública. La elaboración de esta estrategia se enmarca bajo el paraguas del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y se desarrolla con el apoyo de EUROCLIMA+.

La estrategia se realizó con la participación de una importante cantidad de actores y sectores sociales, para asegurar la inclusividad y la participación de los grupos vulnerables. Para [Belén Reyes](#), del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay, este proceso participativo ya fue en sí mismo un proceso de empoderamiento de los diferentes actores.

Por otro lado, Chile avanza en la preparación de su estrategia de ACE, y espera tener este año metodologías participativas para implementar con las comunidades. De cara a la implementación de la estrategia, [Jessica Ulloa](#), del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, señaló cuatro retos: i) transversalizar ACE dentro de las instituciones del Estado, para orientar las políticas públicas sectoriales, ii) convertir la estrategia en una guía para el sector privado, iii) hacer seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las acciones y medir sus avances, iv) asegurar que su aplicación se mantenga en el tiempo, a pesar de los cambios de administración.

Por su parte, Argentina, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y también con el apoyo de EUROCLIMA+, impulsa la estrategia de ACE por medio de políticas públicas. Entre sus avances se destaca la conformación del Gabinete Nacional de Cambio Climático y la aprobación de dos leyes estratégicas: la Ley Yolanda (como homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina), cuyo objetivo es garantizar la formación integral en ambiente para el personal público, y la Ley de Educación Ambiental Integral,

que busca integrar los nuevos paradigmas de la sostenibilidad en la educación formal y no formal.

Un país que inicia el camino para trazar la estrategia de ACE es Costa Rica, pues advirtió esta necesidad cuando se propuso realizar un diagnóstico territorial e inferir que, aunque ya se están ejecutando acciones en este sentido, estas no responden a un objetivo común. Así comenzaron a buscar espacios de conversación y sensibilización de la población sobre mitigación y adaptación al cambio climático y descubrieron el valor de integrar el arte y la cultura con la ciencia.

5.2 Mujeres, comunidades indígenas, rurales y nuevas generaciones en las políticas públicas

El cambio climático y el deterioro ambiental afectan a todas las personas, sin embargo, tiene impactos diferenciados en cada una de ellas, de acuerdo con el género, la pertenencia étnica, la edad y las condiciones socioeconómicas. La acción climática debe no solo evitar el agravamiento de las desigualdades y la pobreza, sino combatirlas, mediante el diseño de estrategias de adaptación y mitigación, que reconozcan las necesidades, saberes y derechos de los pueblos indígenas y rurales, de las personas en situación de vulnerabilidad y de las mujeres.

En las comunidades indígenas y rurales, las mujeres tienen un papel fundamental de defensa de los territorios, de conservación de los saberes ancestrales y de su transmisión entre generaciones. Son guardianas y protectoras de la naturaleza. Sin embargo, los roles productivos y reproductivos de crianza y cuidados tradicionalmente asignados hacen que “sean ellas las que se encuentran en condiciones de más vulnerabilidad ante los cambios ambientales. Una situación que se agrava cuando pertenecen a grupos vulnerables, como el caso de las comunidades indígenas”, expresó [Fátima Andrade](#), de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

En este mismo sentido se expresó **Ángela Cuenca**, directora del Colectivo Casa, de Bolivia, para quien el cambio climático, que ha ampliado las brechas de acceso a bienes comunes como el agua y la tierra, se ha exacerbado con el extractivismo, el cual, además de mercantilizar la naturaleza y contaminar los territorios, tiene impactos en las comunidades y, sobre todo, en la vida de las mujeres.

“Con la llegada de operadores mineros y petroleros se dan casos de acoso a las mujeres, violaciones sexuales, rupturas en el tejido familiar, masculinización de los espacios y se pretende acallar las voces de las mujeres”, manifestó Cuenca. Frente a esta situación, el colectivo lleva a cabo acciones de denuncia de la violencia medioambiental, física y emocional causada por el extractivismo; organizan marchas y reúnen documentación sobre vulneraciones a los derechos; y proponen sistemas alternativos de siembra y cosecha de agua sobre la base de los conocimientos ancestrales que generan más opciones socio productivas de apoyo y ayuda mutua entre mujeres.

El enfoque de género en la justicia climática

“No hay justicia climática sin justicia de género”, declaró **Laura Leonelli Morey**, coordinadora de Recursos Internacionales del Fondo de Mujeres del Sur durante una de las sesiones del Pabellón EUROCLIMA+, donde se incidió en la necesidad de transversalizar el enfoque de género en las CDN de América Latina, a través de diversas herramientas.

Es el caso de Perú que, con el apoyo de EUROCLIMA+, incluyó en su Plan Nacional de Gobierno los enfoques de género, interculturalidad y cooperación intergeneracional como ejes de sus políticas públicas, con el fin de contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Así mismo, en la Comisión Nacional de Cambio Climático de Perú, se incluyó un espacio de representación para las mujeres.

Milagros Sandoval, del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), señaló los siguientes como los principales retos para la incorporación de este

enfoque: i) visibilizar el trabajo de las mujeres y su rol preponderante en la transmisión intergeneracional del conocimiento tradicional, ii) recoger y sistematizar la información sobre sus situaciones particulares y iii) asegurar su participación activa, cuando cargan con la responsabilidad del cuidado de sus hijos e hijas. Este último punto subraya la urgencia de construir estrategias de cuidado comunitario.

Adicional a estos, la lideresa de la Plataforma de los Pueblos indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC), **Tabea Casique Coronado**, sumó otras barreras para la participación de las mujeres como son la discriminación en espacios de poder y los roles que deben cumplir en los hogares que, en ocasiones, se contradicen con su papel de lideresas.

En este sentido, las mujeres y sus comunidades han aportado a los desafíos medioambientales desde múltiples ámbitos. Por ejemplo, para fortalecer la colaboración entre comunidades indígenas y el Gobierno, se realizó en Chile un diálogo regional a través de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CLPI). Una de las conclusiones a las que llegaron fue: “Es menester construir un nuevo pacto político, social, ambiental entre todos los habitantes de la Madre Tierra para revertir las consecuencias de la crisis climática y para ello los conocimientos ancestrales y las tecnologías indígenas son esenciales”, expresó **Hortensia Hidalgo Cáceres**, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC).

Por su parte, las mujeres aimaras y quechuas de Bolivia y Perú, junto con sus comunidades, han integrado los saberes y prácticas ancestrales en la adaptación al cambio climático. El ‘Proyecto Pacha Yatiña Pacha Yachay’ es un servicio climático intercultural que cuenta con un cronograma climático que incluye las épocas de lluvia, de sequía o de granizadas, para pronosticar y preparar las campañas agrícolas.

En el ámbito nacional, Perú puso en marcha la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático, una propuesta de las organizaciones indígenas del país en la que trabajan en conjunto con el Estado, a través del Ministerio de Ambiente, para gestionar, articular y

hacer seguimiento a las propuestas de los pueblos indígenas para la adaptación y mitigación del cambio climático, es decir, se valoran sus conocimientos, prácticas y saberes ancestrales.

La inclusión de las comunidades indígenas y rurales en las políticas de cambio climático

Así como las mujeres, las comunidades indígenas y rurales son actores indispensables en la protección de los ecosistemas, por ello es central analizar cuáles son las principales problemáticas que viven para que puedan mejorar sus niveles de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y aumentar su participación en la definición de proyectos y de mecanismos de compensación.

“Poner en valor el conocimiento y los saberes ancestrales que tienen los pueblos indígenas sobre la vida, visibilizarlos y valorarlos económica y socialmente es clave y por ello abordar este reto requiere no dejar a nadie atrás. Y es más que nunca un tema de justicia social, ambiental y económica”.

Fátima Andrade

La problemática transversal que afrontan las comunidades indígenas latinoamericanas es la lucha por la tenencia y uso de la tierra. Durante la COP26, varios líderes y lideresas expusieron los impactos particulares en cada uno de sus territorios. Los pueblos indígenas de Paraguay se enfrentan a la contaminación por agrotóxicos de las plantaciones de soja, así como a la sequía y la deforestación, como también ocurre en Mato Grosso del Sur, uno de los espacios más afectados por el agronegocio en Brasil, con el monocultivo de caña, maíz y soja. En Perú, las comunidades que habitan la sierra tienen como desafío la contaminación producida por las empresas mineras, mientras las comunidades de la selva se enfrentan a la deforestación y a los derrames de petróleo. En Colombia, la comunidad indígena Zenú Nuevo Caribia lucha contra contaminación de los ríos. Frente a estos retos para adaptarse al cambio climático, los pueblos indígenas de América Latina realizan contribuciones desde diversas estrategias:

En Perú, las comunidades campesinas de Abancay, en el departamento de Apurímac, situado en el sur del país, han implementado el Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hidrológicos (MERSEH), que consiste en un acuerdo voluntario para asegurar la disponibilidad de agua, optimizar la demanda y fortalecer la gobernanza de los recursos hídricos. Con él se beneficia la población urbana usuaria de agua potable y las comunidades campesinas, ubicadas



De izquierda a derecha, Karla Mena Soto, Angélica Ponce, Augusto Valderrana, Andrew Scyner

en la cabecera de la cuenca, quienes gestionan la provisión de agua, contribuyen en la conservación de los ecosistemas y, por ello, reciben una retribución.

En Centroamérica está el proyecto de Gestión del Conocimiento y Buenas prácticas para la adaptación al cambio climático, que cuenta con la Red de Observación Climática Comunitaria, la cual hace trabajo de vigilancia climática, interviene en sistemas de alerta temprana y acompaña a pequeños productores que salvaguardan los ecosistemas. Para [Abdel García](#), del Centro von Humboldt Nicaragua: “La sociedad es el actor en la primera línea de impacto de los eventos, por lo tanto, debería ser el primer eslabón en la producción de alertas climáticas en su territorio”.

El papel de las infancias y las juventudes

Las infancias y juventudes deben ser tenidas en cuenta para afrontar las problemáticas ambientales, y en este sentido, [Milagro Brondi Z.](#), de Terre des hommes, citó [el informe La crisis climática es una crisis de los derechos del niño, de Unicef](#), según el cual 55 millones de niños, niñas y adolescentes están expuestos a la escasez del agua, 45 millones están expuestos a olas del calor y 105 millones están expuestos a la contaminación atmosférica. Por esto, la meta de Terre des hommes, en el marco de

la Convención de los Derechos del Niño, es lograr un protocolo facultativo sobre los derechos ambientales de la infancia.

Justamente en la sesión ‘La participación de los jóvenes en la agenda climática: Voces de Europa, América Latina y el Caribe’, se resaltaron tres experiencias. La primera fue la de Francisco Vera, quien a sus 12 años es un reconocido activista colombiano. En marzo de 2019, creó Guardianes por la vida, organización ambiental que le da voz a los niños y niñas. Han realizado sembratones de árboles, jornadas de recolección de basura y han participado en mesas de conversación con el Gobierno sobre la fracturación hidráulica.

La segunda fue la de Daniela Miranda y Marco Yañez Marín, jóvenes de la delegación de negociación de Chile a la COP26, quienes destacaron la necesidad de expandir en la región la formación en negociaciones climáticas que ellos han recibido y así incluir la perspectiva de la juventud en la toma de decisiones, desde un diálogo intergeneracional, intersectorial e interseccional.

La tercera fue la de Merel Schaap, de Países Bajos, quien forma parte de la red colaborativa de 60 organizaciones juveniles que construyeron la agenda de la juventud y participan en mesas de negociación con el Gobierno de su país. Participan además en el Consejo Económico y Social y de la Alianza para el Desarrollo Sostenible.

Reconocimiento del rol de la naturaleza

Para comprender la estrecha relación en los sistemas socioecológicos es clave reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y agente en nuestras sociedades. Es el caso, por ejemplo, de los Andes tropicales, que se encuentran en una situación crítica por ser una de las regiones con mayor grado de exposición y sensibilidad a los cambios ambientales globales.

[Eduardo Calvo B.](#), del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), reveló que en el Informe especial de esta institución sobre



Francisco Vara Manzanares

el océano y la criósfera, se confirmó el retroceso de glaciares como consecuencia de las variaciones del clima por causa de las emisiones de dióxido de carbono. Se calcula que, en el peor de los escenarios, los glaciares van a desaparecer hacia 2060.

“Si el planeta emitiese como los cuatro países de la Comunidad Andina, hoy día probablemente no estaríamos hablando del cambio climático”.

Eduardo Calvo B.

En este sentido, para la protección de los ecosistemas de montaña en los países andinos es vital reconocer los derechos de la naturaleza. Para [Paul Desamblanc C.](#), parlamentario andino por la República de Ecuador, los páramos andinos tienen una importancia fundamental, por su capacidad de almacenamiento y regulación del agua, así como de sumideros de carbono. Por estas razones, el Parlamento Andino trabaja en los proyectos de marcos normativos sobre “los derechos de la naturaleza” y “Pacto Andino para la defensa de la naturaleza”.

Así mismo, Desamblanc, destacó las siguientes medidas para la protección de los páramos andinos: i) la inclusión de los páramos en los sistemas de áreas protegidas, ii) la generación de mayor conocimiento sobre su funcionamiento y afectaciones, iii) su reconocimiento como sistemas clave para la reducción de gases de efecto invernadero, iv) la limitación de algunas actividades económicas, v) la participación activa de las comunidades y pueblos originarios que los habitan.

“Los páramos andinos llegan a retener incluso 10 veces más carbono que un bosque tropical, lo cual ayuda a reducir drásticamente la cantidad de CO2 del aire, convirtiendo a los páramos andinos en los principales sumideros de carbono del mundo”.

Paul Desamblanc

Infraestructura en la Amazonia

Para [Ciro Salazar Valdivia](#), de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 2020 fue un año devastador para los bosques tropicales de la Amazonia y confirmó que las pérdidas son de aproximadamente 2,3 millones de hectáreas. Aunque no tenga visibilidad, la deforestación producida por los proyectos de infraestructura es una de sus principales amenazas, pues se presentan como vías de acceso para la conectividad, pero cuando no tienen una adecuada planificación, posibilitan la minería y tala ilegal, el narcotráfico, el acaparamiento de tierras y la migración descontrolada.

[Gabriela Soto Zavaleta](#), del programa Cambio Climático y Bosques de DAR, se unió a las voces de defensa por la Amazonia. Aseguró que es alarmante que la deforestación continúe a cinco años del Acuerdo de París. Resulta una contradicción entre los compromisos que se asumen en los eventos internacionales, con lo que se impulsa en el ámbito nacional. Pidió que las CDN incluyan los análisis de los impactos de las infraestructuras viales que surjan desde las organizaciones de sociedad civil y de los pueblos indígenas.

En la misma dirección apuntó [Rodrigo Botero García](#), director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia, quien propuso aplicar los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial, los que podrían contribuir a la mitigación de estos impactos, ya que en sus diseños se tiene en cuenta la movilización de poblaciones de fauna y el mantenimiento de coberturas vegetales, así como restricciones en el uso del suelo.

Justicia climática en América Latina

Las consecuencias de la degradación ambiental no solo son para el territorio; las comunidades que lo habitan también se ven afectadas. [Óscar Daza Gutiérrez](#), de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), denunció que ha aumentado la persecución a líderes indígenas defensores de los territorios. Por esto, exigió que se integre a los pueblos indígenas en la

toma de decisiones sobre la gestión de los bosques y que se respete el derecho de consulta previa: “Porque proteger a los pueblos indígenas, sus territorios y sus sistemas de conocimiento tradicional es proteger la biodiversidad de la Amazonia y contribuir a la lucha del cambio climático”, expresó. En correspondencia con lo anterior, y con el fin de alcanzar sociedades más democráticas, que garanticen el derecho de cada persona y de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano, es necesario seguir la línea de lo que marca el Acuerdo de Escazú, el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Además, busca garantizar la implementación efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. El acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Está abierto a los 33 países de la región, de los cuales 24 lo han firmado y 12 lo han ratificado.

El [Acuerdo de Escazú](#) tiene un papel significativo en la promoción de la justicia climática en América Latina. Según [Carlos de Miguel Alonso](#), de la CEPAL, los principales mensajes del Acuerdo en cuanto a cambio climático, son: i) la búsqueda de la transparencia y la mejora de los procesos de gobernanza y de decisión ambiental, ii) la vinculación de la protección de los derechos humanos con la protección ambiental y del clima, iii) el énfasis se centra en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y eso tiene que ver con la transición justa en la que son sustanciales la cooperación y el fortalecimiento de capacidades.

En esta misma línea, [Erick Pajares G.](#), CEO de Biosfera – Investigación de Futuros, aseguró que en los próximos años los litigios climáticos proliferarán a medida que los efectos del calentamiento global se evidencien y propaguen aún más. El objetivo central de la justicia climática es la efectividad como respuesta a la inacción de los gobiernos. Por esto, para él, el derecho internacional ambiental se constituye en una herramienta de concientización frente a la

devastación climática, “en tanto incorpora como parte de sus fundamentos conceptuales, paradigmas disruptivos, como conciencia y ciudadanía planetarias, el reconocimiento de la naturaleza, los derechos de las generaciones futuras, los derechos ecológicos o los derechos ambientales de las infancias”, indicó.

5.3 Información, conocimiento y educación

Para el diseño de acciones de empoderamiento para la acción climática y para la toma de decisiones socioambientales, las Redes de Investigación y Educación son determinantes para la articulación de la información climática en tanto permiten que las comunidades investigadoras en las diferentes regiones del mundo tengan acceso a datos medioambientales y los usen para el desarrollo de sus actividades.

Por ejemplo, RedCLARA cuenta con más de 2.000 instituciones conectadas a través de sus 10 redes nacionales de investigación y educación. Su objetivo es fortalecer el desarrollo de la ciencia, la educación, la cultura y la innovación en América Latina, a través del uso de redes avanzadas y la cooperación con África y Europa. Otra red de investigación y educación es ASREN, de la región árabe, con incidencia en África y Asia, cuyo fin es conectar a las instituciones árabes entre sí y con el mundo, a través de redes de comunicación de datos de alta velocidad para promover la investigación científica, la innovación y la educación. Otro ejemplo es GÉANT, una red académica y de investigación paneuropea, que conecta las redes de investigación europea con el mundo y ofrece un ecosistema de información, infraestructuras y servicios para la comunicación, colaboración, intercambio de datos y acceso a servicios, instalaciones y repositorios de datos.

La obtención y procesamiento de datos son esenciales para realizar un seguimiento y atajar el cambio climático. Sin embargo, son numerosos los retos con los que se enfrentan quienes manejan y quienes usan esos datos. Los especialistas reunidos

en el pabellón detallaron los siguientes desafíos: i) crear puentes entre la comunidad científica y la sociedad civil para hacer pedagogía del uso de los datos, ii) dirigirse a quienes toman decisiones políticas para articular esfuerzos en términos de políticas públicas, iii) garantizar el acceso equitativo en las diversas regiones del mundo, iv) asegurar datos de alta resolución, v) posibilitar el acceso a pronósticos meteorológicos en tiempo real, con el fin de fomentar los sistemas de alerta temprana.

Laboratorios de Acción Climática en instituciones de educación superior

Con el fin de impulsar los cambios que se requieren en un contexto socioecológico cada vez más adverso, las universidades latinoamericanas están diseñando estrategias que les permitan trabajar con las comunidades y aumentar la resiliencia de las mismas. Es así como han construido laboratorios de innovación social para la acción climática, una plataforma de colaboración Sur-Sur para pensar soluciones desde la educación.

En la Universidad de Caldas, Colombia, existe ClimateLabs Erasmus+, que, según su coordinador, **Camilo Vallejo**, busca hacer una transformación curricular que reivindique la interdisciplinariedad, apoyar la construcción y financiación de proyectos innovadores y hacer calificación de la política pública a partir de evidencia. En este último punto ya tienen un avance que es el caso piloto para ayudar a construir la política pública de seguridad alimentaria, a partir de huertos urbanos.

En Food System Resilience Lab, de la Universidad EAN de Colombia, la idea es fortalecer la educación de los y las jóvenes, a través de la cocreación de soluciones para la mitigación de riesgos alimentarios urbanos. Su directora, **Paola Sánchez**, expresó que el proyecto tiene como fin mostrar la conexión entre la alimentación y el cambio climático y que la sociedad no solo conozca las problemáticas ambientales, sino que actúe para solucionarlas.

Además de estas iniciativas en Colombia, existen otras en Brasil, como Unicap Climate Lab, de la



Horst Pilger, Jefe de Sector, INPTA, Unión Europea

Universidad Católica de Pernambuco. De acuerdo con su coordinador, [João Elton de Jesus](#), el laboratorio quiere impulsar acciones educativas en temas ambientales y climáticos, además de promover proyectos de innovación social sostenible que puedan derivar en ingresos para la población, por ello trabajan de la mano con la comunidad universitaria y los barrios vulnerables.

Entre los principales retos que identificaron está el romper los esquemas rígidos de la universidad, a través del uso de la metodología de innovación y cocreación; integrar a todos los actores del ecosistema local, con el fin de generar alianzas y elaborar proyectos de manera conjunta para que la investigación tenga un real impacto en la comunidad.

Visores de información climática para la adaptación al cambio climático

Las herramientas de visualización de datos climáticos tienen un rol como facilitadoras del acceso a información que permita accionar medidas de adaptación en el mundo.

En Centroamérica, con el apoyo de EUROCLIMA+, se creó el [Visor de Escenarios de Cambio Climático](#), con el propósito de dotar a esta región con un conjunto de escenarios de cambio climático con una resolución apropiada para trabajar, dadas las características geográficas particulares de este territorio. El portal contiene categorías como modelos, en los que están CORDEX, análogos o de regresión; variables, como temperatura y precipitación; y escenarios de sensibilidad, dependiendo de los forzantes radioactivos y el aumento de los gases de efecto invernadero.

Otros países latinoamericanos ya cuentan con este tipo de herramientas. Chile ha desarrollado el [Atlas de Riesgo Climático](#), compuesto por tres elementos: un explorador de amenazas climáticas, a través de 45 índices agregados de temperatura, precipitación, olas de calor y frío; mapas de riesgos climáticos sectoriales, en los que se emplean Cadenas de Impacto, que es el análisis de un sistema bajo una amenaza, considerando su exposición y

vulnerabilidad; y mapas de distribución de especies, que visualizan y descargan modelos de distribución para especies de flora y fauna nativas y endémicas. Estos son útiles para la elaboración de planes de acción de cambio climático regionales y comunales, así como para la evaluación ambiental de proyectos.

Ecuador está desarrollando un geovisor de escenarios y riesgos climáticos, con los lineamientos del IPCC y también apoyado por EUROCLIMA+, que busca dar soporte a la gestión de cambio climático e incentivar la investigación. Contará con cuatro temáticas: proyecciones climáticas, medidas de adaptación al cambio climático, indicador de cambio climático y análisis de riesgo climático.

En España existe [Adaptecca](#), que se enmarca en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Se concibe como una herramienta viva, que cambia de acuerdo con las necesidades de la comunidad y que tiene como fortaleza su vinculación con las políticas públicas. También dependiendo del conjunto de datos se pueden consultar hasta 26 variables y se recogen principalmente dos escenarios de cambio climático el 4.5 y el 8.5, como escenario intermedio y de altas emisiones. La información se puede consultar por años, meses o estaciones, y se puede seleccionar una región concreta.

Otra iniciativa es el [Atlas Interactivo del IPCC](#), desarrollado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la empresa española Predictia, que expande los resultados del sexto informe de evaluación del IPCC. Los hallazgos del IPCC se pueden observar de manera espacializada, además de que sirve como base para desarrollar datos interactivos u otras aplicaciones regionales o nacionales.

[Jorge Tamayo](#), de la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), reflexionó sobre el papel de los visores e indicó la importancia de que la información que producen sea útil y accesible, por lo que es valioso que los usuarios se involucren en todo el proceso, para que sean consideradas las necesidades de los distintos sectores de investigación y la de sociedad.

5.4 Acciones desde los parlamentos

Uno de los eventos que más demostró el liderazgo de América Latina en las negociaciones del clima fue el encuentro de líderes parlamentarios de más de diez países de América Latina y el Caribe, junto con parlamentarios del Reino Unido y España, quienes se reunieron en el Pabellón de EUROCLIMA+ para anunciar la creación del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), que cuenta con el apoyo de la CEPAL y busca fortalecer la cooperación interparlamentaria para promover el intercambio de experiencias y propuestas, el seguimiento de discusiones legislativas y la difusión de las acciones gubernamentales en materia de transición justa.

Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, celebró la creación del observatorio porque fortalece la cooperación interparlamentaria para emprender acciones comunes, posibilita un espacio de intercambio entre pares y al mismo tiempo brinda visibilidad a las políticas y buenas prácticas de los países partícipes y da voz a la región frente al problema de la degradación de la naturaleza. Por otra parte, **Juan Antonio López de Uralde Garmendia**, parlamentario español, anunció la disposición del Congreso de los Diputados de España para cooperar en las iniciativas que se adopten en la COP26, y recalcó la necesidad de llenar de contenido dichos acuerdos para que puedan ser transformados en leyes de obligatorio cumplimiento para los gobiernos.

Así mismo, **Alex Sobel**, parlamentario de Reino Unido, mencionó la relevancia del Observatorio porque facilita el trabajo en red para crear solidaridad global. Además, será muy útil en la lucha contra los productos procedentes de la deforestación ilegal, ya que permitirá a los parlamentarios y parlamentarias obtener información sobre el origen de los artículos y, de esta manera, asegurar que estén cumpliendo la ley. Celebró también la centralidad que se le ha dado en esta iniciativa a los derechos humanos y a la interseccionalidad, imprescindibles para trabajar hacia la transición justa.

“Una transición justa que se haga a expensas de países en vías de desarrollo, no es justicia en absoluto”.

Alex Sobel,
miembro del Parlamento de Reino Unido

Para **Gladys González**, senadora y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación Argentina, los funcionarios y funcionarias se han visto interpelados para enfrentar el desafío de la crisis climática y ecológica en un doble sentido: hacia el interior de los países, para sancionar leyes que consoliden políticas de Estado en pos de la sostenibilidad, y hacia afuera de estos, para trabajar con otras naciones del mundo en cooperación, como está sucediendo con el OPCC.

Igualmente, **Brenda Austin**, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Argentina, resaltó la importancia del OPCC pues a través de la colaboración y la cocreación se podrá avanzar en legislación basada en evidencia científica que les permita a los países no empezar de cero sus acciones climáticas sino aprovechar las experiencias virtuosas de otros.

Por otra parte, durante la COP26 fueron convocados parlamentarios y parlamentarias de Brasil y Alemania para dialogar sobre cómo impulsar el debate sobre la transición justa en los parlamentos. En este sentido, **Monica Sodré**, directora ejecutiva de Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), presentó el estudio *La Agenda Climática en el Congreso Nacional: una investigación sobre la percepción de los parlamentarios brasileños*, realizado con entrevistas a 159 congresistas. Para el 87% de los entrevistados, Brasil debería invertir más recursos para reducir la deforestación, pero solo el 69% está de acuerdo con un presupuesto más robusto para el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el cual es un actor clave para articular las estrategias de política ambiental y de protección de la Amazonia, y que ha sufrido considerables contingencias en los últimos años.

También por Brasil, **Alessandro Molon**, miembro del Congreso Nacional, hizo alusión al rol del Parlamento en la agenda de transición hacia un modelo económico justo y sostenible, por lo que advirtió la necesidad de un Green Deal Brasileño, inspirado en elementos del Green Deal de la Unión Europea, pero teniendo en cuenta las características propias del país, cuyo principal problema es la deforestación y el uso de la tierra. Esta propuesta cuenta con cinco ejes, que son: infraestructura, ciudades, transición justa y sostenible, uso del suelo y los bosques, y los cambios políticos y normativos.

Finalmente, **Lisa Badum**, del Parlamento Federal alemán, explicó que en la actualidad la crisis climática está impactando drásticamente a su país, algo que no se había visto en el pasado, por lo que el tema del cambio climático está presente en los debates parlamentarios y en las movilizaciones ciudadanas, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas al respecto. Sin embargo, denunció que las decisiones que se toman en el Parlamento no reflejan la magnitud de la crisis y que es un reto convertir las demandas ciudadanas en una acción política real.

MENSAJES CLAVE

- » La Acción para el Empoderamiento Climático es una parte integral del planeamiento e implementación de la acción climática. La educación y concientización de todos y todas es paso previo obligado para la acción.
- » La participación activa de las infancias y los jóvenes en la toma de decisiones y la implementación de acciones climáticas es necesaria, no solo por justicia intergeneracional, sino para que dichas políticas tengan más impacto y lleguen a más personas, aprovechando conocimientos, vivencias y puntos de vista variados.
- » Para diseñar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, es central identificar las necesidades, saberes, prácticas y derechos de los pueblos indígenas y rurales e integrarlos en la toma de decisiones.
- » Es crucial reconocer la intersección entre justicia climática y justicia de género, en relación con los impactos del extractivismo en las mujeres y las condiciones de vulnerabilidad de estas ante los cambios ambientales por sus roles en la producción y reproducción.
- » El Acuerdo de Escazú presenta una oportunidad para blindar el rol de los líderes y lideresas ambientales, mejorar los mecanismos de acceso a la información y la participación, así como impulsar la justicia climática en la región.
- » Es fundamental involucrar a la sociedad civil en las acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático, desde la educación y la comunicación.
- » Hay avances en la participación de los parlamentos como actores cruciales para que los acuerdos internacionales sobre el clima se traduzcan en políticas públicas concretas en el ámbito nacional. La creación del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC) durante la COP26, busca fortalecer esa cooperación interparlamentaria.
- » En la región avanza la creación de visores de información climática, plataformas tecnológicas con una potente capacidad de análisis de riesgos y escenarios a futuro del clima, que pueden orientar la toma de decisiones.

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

PAÍSES CITADOS

- » Argentina
- » Bolivia
- » Chile
- » Colombia
- » Costa Rica
- » Ecuador
- » España
- » México
- » Nicaragua
- » Paraguay
- » Perú
- » Reino Unido
- » Uruguay

HERRAMIENTAS CITADAS

- » Estrategia Climática de Largo Plazo
- » Laboratorios de Acción Climática
- » Visores de información climática

CENTROAMÉRICA

Visor de Escenarios de Cambio Climático

Portal regional con información climática unificada. Ofrece insumos para una mejor adaptación a la variabilidad del clima y el mejoramiento de la productividad, la competitividad y la calidad de vida. Busca servir de puente para usuarios y especialistas climatólogos.

<https://centroclima.org/>



ESPAÑA

Adaptecca

Plataforma de consulta e intercambio de información en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Su fin es reforzar las capacidades de la sociedad y de las administraciones en sus acciones de adaptación.

<https://adaptecca.es/>



ESPAÑA

Atlas Interactivo del IPCC

Permite comparar información climática de todas las regiones del mundo para obtener proyecciones de cómo se verán afectadas por el cambio climático.

<https://interactive-atlas.ipcc.ch/>

ALGUNOS CASOS PAÍS PRESENTADOS EN LA COP26

**CHILE**

*Atlas de Riesgo Climático
(ARClím)*

Su objetivo es desarrollar un conjunto de mapas de riesgos relacionados con el cambio climático. Aporta al diseño de políticas públicas y a la implementación de medidas de adaptación.

<https://arclim.mma.gob.cl/>



MARC VANHEUKELEN

Asesor hors-classe en diplomacia climática de la UE

“No solo se trata de proporcionar ayudas, sino de aprender los unos de los otros. Estamos en el mismo barco, tenemos los mismos desafíos, tanto para la adaptación como para la mitigación, y EUROCLIMA+ es una plataforma excelente para el diálogo, para poder apoyarnos y para aprender los unos de los otros”.

6. Impacto y legado de la colaboración UE-LAC en el camino a Glasgow

Durante dos semanas de noviembre de 2021, el Pabellón de EUROCLIMA+ volvió a ser la “Casa de América Latina” en la COP; una casa construida sobre los cimientos sólidos de la colaboración entre países, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Esa apuesta por la colaboración regional fue la misma que, en diciembre de 2019, inspiró [la primera edición](#) del Pabellón de EUROCLIMA+ en la COP25 de Chile en Madrid. Esta visión auspiciada por la UE volvió a ponerse de manifiesto en la COP26 de Glasgow, reforzada tras dos años extraordinariamente difíciles.

El tiempo transcurrido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021 constituye uno de los periodos más complejos de nuestra historia contemporánea. La pandemia, seguida de una profunda crisis socioeconómica, sobre el fondo de la crisis climática, pusieron en una dificultad sin precedentes el curso de las políticas nacionales y de la cooperación para la acción climática.

Sin precedentes fue el que la presidencia chilena de la COP durara dos años, en lugar de uno; el que los delegados y delegadas internacionales pasaran casi dos años sin poder reunirse en persona para hacer avanzar las agendas multilaterales; el que los recursos económicos y de personal de las administraciones a todos los niveles tuvieran que focalizarse en la emergencia de proteger a las personas tanto de la COVID-19 como de sus graves impactos socioeconómicos.

Aunque la flexibilización de las restricciones de viaje, la llegada de las vacunas y una menor

incidencia del coronavirus permitió la celebración de la COP26 en Glasgow, fueron numerosos los retos de participación y funcionamiento impuestos por la pandemia.

Gracias a las nuevas tecnologías, el Pabellón de EUROCLIMA+ logró dar cabida a un gran número y un amplio espectro de voces tanto en persona como de manera virtual. Todas las sesiones del pabellón pudieron seguirse en vivo en la lengua de origen y con traducción simultánea, y todos los vídeos y materiales, como las presentaciones, están a disposición en el [sitio web](#) de EUROCLIMA+.

Como prueba de la apuesta decidida de la Unión Europea con la visión de EUROCLIMA+, la agenda del Pabellón comenzó en la mañana del 2 de noviembre con [un evento](#) en el pabellón principal de la UE que analizó el legado regional de la colaboración entre EUROCLIMA+ y la presidencia de la COP25 en la promoción de la acción climática en América Latina y el Caribe.

Ese mismo día, ya en horario de tarde europea y de mañana en las Américas, la agenda del propio Pabellón de EUROCLIMA+ se abrió con [un evento](#) que ahondó en el legado que para la nación chilena tuvo la presidencia de la COP25.

La colaboración entre la presidencia chilena de la COP25 y la Unión Europea se ha venido desarrollando desde el inicio de la presidencia entrante, durante 2019 con el trabajo preparatorio para la conferencia que finalmente tuvo que celebrarse en Madrid, y hasta finales de 2021 con la conclusión de la presidencia chilena al pasarle el testigo al Reino Unido.

La colaboración UE-Chile ha permitido apoyar activamente a los países de América Latina y el Caribe a incrementar los niveles de ambición de sus CDN y de sus estrategias de largo plazo y alinearlas con los objetivos del Acuerdo de París.

Esta alianza entre la Unión Europea y la presidencia de la COP25 contó con el apoyo de la CEPAL y el PNUMA en la implementación de 30 iniciativas de carácter regional entre 2019 y 2021. Estas iniciativas tocaron todos los ámbitos de la acción climática como las evidencias científicas, la transparencia, el enfoque de género, la participación y empoderamiento, la electromovilidad, la transición justa y la creación de empleos verdes, la innovación y el emprendimiento, la economía circular, el hidrógeno verde, la agricultura resiliente y el establecimiento de nuevas alianzas.

Las iniciativas involucraron, además, a un amplio abanico de actores: mundo científico y académico, sector privado y emprendedores, ciudadanía y ONG, tomadores de decisión, mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y gobiernos locales, entre otros.

En su intervención en el Pabellón, la presidenta de la COP25 y ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, dio las gracias a la Unión Europea y al programa EUROCLIMA+ por todo el apoyo y la colaboración que tuvieron un enfoque marcadamente regional.

“Establecimos con la Unión Europea una alianza basada en nuestra visión común de impulsar la acción climática con sentido de urgencia, basada en la ciencia, y como una oportunidad de recuperación verde, y no solo en Chile sino también en América Latina y el Caribe, porque la COP25 era la COP latinoamericana”.

Carolina Schmidt

Por su parte, **Jolita Butkeviciene**, directora para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea, destacó que las iniciativas conjuntas permitieron

“impulsar la creación de compromisos concretos para pasar de la negociación política a una acción climática real”.

Marc Vanheukelen, asesor hors-classe en diplomacia climática de la UE, reiteró el apoyo de la Unión Europea a la acción climática en América Latina a través del Programa EUROCLIMA+ en el marco del Pacto Verde y de los fondos de recuperación NextGeneration EU y adelantó que de esos fondos ya se han destinado 300 millones de dólares para la adaptación.

“No solo se trata de proporcionar ayudas, sino de aprender los unos de los otros. Estamos en el mismo barco, tenemos los mismos desafíos, tanto para la adaptación como para la mitigación, y EUROCLIMA+ es una plataforma excelente para el diálogo, para poder apoyarnos y para aprender los unos de los otros”.

Marc Vanheukelen

Joseluis Samaniego, jefe de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, encomendó a la Presidencia chilena por haber “impulsado el trabajo regional con el ejemplo, siendo el primer país en la región en entregar su CDN actualizada a la Convención y por haber recientemente presentado su estrategia climática de largo plazo”.

La contribución de la Presidencia chilena a hacer avanzar la acción climática regional no se limitó al ámbito gubernamental. **Gonzalo Muñoz**, Champion de alto nivel para la acción climática designado por la presidencia chilena, destacó los esfuerzos realizados para “alinear a los actores no estatales con la ciencia, convirtiendo el 1,5° C en el nuevo objetivo climático para la sociedad global y que, una vez logrado, hacer que las cero emisiones netas al 2050 fueran el nuevo punto de referencia para las empresas, las ciudades, las regiones y los inversionistas”.

Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica y presidenta del Foro de Ministros de Medio

Ambiente de América Latina y el Caribe describió la buena colaboración entre la UE, la Presidencia chilena de la COP25 y la región latinoamericana gracias a un “alineamiento de valores, de visión, de cómo entendemos que este proceso de descarbonización y de generación de resiliencia tiene que ser un proceso que genere bienestar y progreso; una oportunidad para transformar y modernizar nuestras economías, de manera inclusiva y respetando los derechos humanos”.

Por su parte, **Hugo Morán Hernández**, secretario de Estado de Medio Ambiente de España destacó la experiencia acumulada por la **Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático** (RIOCC), como “un espacio de interconexión y aprendizaje entre todos, donde se generan herramientas que sirven para dar respuestas a situaciones inesperadas en momentos críticos, como lo fue la COP25” bajo presidencia chilena celebrada en Madrid.

“En ese proceso de cooperación fuimos capaces de sacarla (la COP) adelante, poniendo al servicio del conjunto de la comunidad internacional nuestro saber hacer común”, dijo. Fruto de esta colaboración iberoamericana, continuó, “surge una nueva forma de entender los procesos de diálogo que deben

acompañar las conferencias del clima hacia el futuro, integrando al conjunto de la sociedad en el diálogo, más allá de los espacios de negociación entre gobiernos”.

Andrés Landerretche, coordinador de la Presidencia de la COP25, dio las gracias al Gobierno de España “por la solidaridad en momentos muy difíciles para Chile” y por la colaboración que hizo posible relocalizar la COP de Santiago en Madrid en apenas cinco semanas.

En palabras de Landerretche, para la región latinoamericana, ha habido “un antes y un después de esta Presidencia, en el sentido de que, si bien el cambio climático era un tema conocido, no lo era al nivel que logramos permear en la sociedad”. Esto fue posible gracias a “un enfoque muy inclusivo con todos los grupos claves de actores interesados, en particular los pueblos originarios y los gobiernos locales”, añadió.

El impacto positivo que la COP25 ha tenido para Chile y la región ha sido amplio y profundo como muestra el libro **Legado COP25** publicado en vísperas de COP26. Algunos de los aspectos nacionales del legado quedaron de manifiesto en el evento de



De izquierda a derecha, Mariana Castaño Cano, Marina Casas, Juan Carlos Jobet, Carolina Schmidt, Andrés Couve, Julio Cordano y Andrew Scyner. Crédito: Ministerio de Medio Ambiente de Chile.

apertura del Pabellón de EUROCLIMA+ que reunió a tres ministros y al jefe de la delegación de Chile ante la CMNUCC.

Andrés Couve, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, describió cómo pusieron en marcha un espacio de vinculación formal entre los científicos y los tomadores de decisiones. El resultado, dijo, ha sido que “alrededor de 600 investigadores chilenos materializaron más de 20 documentos técnicos que sistematizan la evidencia nacional y 188 recomendaciones de políticas públicas para avanzar en el diseño y apoyo en el desarrollo de iniciativas de mitigación, adaptación y medios de implementación para la acción climática en el país”.

Por su parte, **Julio Cordano**, jefe de la delegación de Chile ante la CMNUCC, destacó el fortalecimiento de la participación de los jóvenes en el proceso de las negociaciones climáticas gracias el programa

‘Jóvenes Negociadores’. Se trata de una iniciativa de capacitación donde participaron 1.500 jóvenes latinoamericanos y que, en el caso de Chile, permitió la incorporación a la delegación oficial de dos jóvenes.

Se trata de Daniela Miranda, socióloga de 26 años, y Marco Yáñez Marín, licenciado en derecho de 27 años. Precisamente, Daniela y Marco participaron en un evento sobre jóvenes y cambio climático organizado por EUROCLIMA+ y en el que también estuvieron Francisco Vera Manzanares, activista colombiano de 12 años, y Merel Schaap, experta en participación juvenil de los Países Bajos. A todos se les ve en esta imagen junto a Horst Pilger y Guillermo Dascal de EUROCLIMA+.



De izquierda a derecha, Marco Yáñez Marín, Daniela Miranda,

Francisco Vara Manzanares, Horst Pilger, Merel Schaap y Guillermo Dascal

Conclusiones

El 13 de noviembre de 2021, la COP26 de Glasgow se cerró con más de 24 horas de retraso reflejo de la complejidad de lograr consensos frente al cambio climático, cuyas causas, impactos y soluciones tocan casi todos los aspectos de la sociedad y la economía de todas las naciones. Si ya la COP25 fue excepcional y un reto logístico, por el cambio de sede a poco más de un mes antes de la cita; la COP26, y los casi dos años que separaron ambas conferencias redefinieron lo que entendíamos por 'excepcional'.

La pandemia de la COVID-19 impactó de lleno la realidad y alteró el proceso multilateral bajo la CMNUCC. Durante casi dos años, los delegados, observadores, activistas y medios de comunicación, quienes acudimos a las conferencias del clima y otras reuniones de trabajo, tuvimos que adaptarnos a la virtualidad a la vez que se lidiábamos con el nuevo orden de prioridades impuesto por la pandemia.

El trabajo de EUROCLIMA+, como el de los países socios y las agencias implementadoras, fue impactado, pero gracias a las nuevas tecnologías, los procesos de colaboración ya existentes y a la determinación de todas y todos, el trabajo de impulso a la acción climática regional siguió adelante. De estos casi dos años de trabajo singular entre la COP25 y la COP26 se dio cuenta en los numerosos eventos del Pabellón de EUROCLIMA+. Este estudio temático ofrece un resumen de esas fructíferas sesiones en Glasgow.

Los cientos de responsables políticos, especialistas y activistas- que pasaron en persona y virtualmente por

el pabellón- tomaron el pulso al estado de la acción climática en la región. Destacaron los principales logros alcanzados, pero, en especial, señalaron los obstáculos que necesitan salvarse para avanzar más rápido hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.

Las conclusiones de este estudio a la luz de lo expuesto en los seis capítulos anteriores son: (1) que seguimos necesitando más ambición climática por parte de todos los actores estatales y no estatales, a la vez que urgen cambios estructurales para conciliar el desarrollo con los límites planetarios; (2) que aunque las finanzas climáticas fluyan como nunca antes, estas siguen siendo insuficientes y es necesaria más inversión, mejores canales de acceso, y más solidaridad para materializar la transición energética y la adaptación; (3) que hay que inspirarse, salvaguardar y dar más medios a quienes sobre el terreno están en la primera línea de las causas y las soluciones del cambio climático, empezando por los gobiernos y las poblaciones locales; (4) que la acción climática necesita ir de la mano con la conservación de la biodiversidad y que la naturaleza es una parte intrínseca y poderosa de la solución climática y la seguridad alimentaria; (5) que todas y todos debemos ser parte de una acción climática inclusiva y justa; y que (6) la colaboración y el multilateralismo son las mejores herramientas para avanzar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos y de desarrollo.

ANEXOS

Anexo I. Listado de eventos

N. Evento	Organizadores	Título del evento
E1		La Unión Europea y América Latina y el Caribe Trabajando juntos para una recuperación pospandémica sostenible y baja en carbono.
E2	Ministerio del Medio Ambiente de Chile	Apoyo de la Unión Europea, a través de su programa EUROCLIMA+, a Chile en su rol de Presidencia de la COP25, para promover la acción climática en América Latina y el Caribe
E3	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba	Experiencias exitosas de Cuba y Paraguay con el Programa EUROCLIMA+
E4		Soluciones basadas en la naturaleza para zonas urbanas de Latinoamérica
E5	Low Carbon and Circular Economy Business Action (LCBA) en Latam	Experiencias en Latinoamérica en el marco del programa LCBA para acelerar la transición hacia la neutralidad
E6	City to City Cooperation	El papel de la cooperación urbana internacional en la creación de políticas climáticas orientadas a la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático y/o la protección de hábitat naturales (caso de estudios de Barranquilla (CO), Belo Horizonte)
E7		Grupo de trabajo sobre transición justa y trabajo decente
E8	Ministerio de Energía de Chile	El papel de la financiación verde para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
E9	Oficina para América Latina y el Caribe del PNUMA	El financiamiento que necesitamos para el futuro que queremos: una charla con los actores financieros que lideran la transformación hacia una economía sostenible y de neutralidad climática en la región de ALC
E10	Agence française de développement (AFD) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)	Cerrando la brecha de financiamiento para la acción climática local: soluciones para el desarrollo de proyectos bancables y de vehículos financieros adecuados
E11	Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP)	Empoderando para la Acción Climática: visiones y aprendizajes
E12	Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)	Instrumentos de precios al carbono, aplicaciones en ALC
E13	FIIAP	Visores de información climática para la adaptación al cambio climático
E14	GIZ y EUROCLIMA+	Acelerando la ambición climática del sector privado en América Latina: Oportunidades y retos de las hojas de ruta sectoriales de descarbonización

E15	CEPAL y Comisión Social y Económica para Asia y el Pacífico (ESCAP)	El modelo de las tres brechas: el Gran Impulso para la Sostenibilidad
E16	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)	Eficiencia energética en ALyC para la adaptación y la mitigación del cambio climático en el marco del Acuerdo de París
E17	Secretaría de Planificación de la Provincia de Manabí	El rol de planeación territorial regional hacia la definición de instrumentos para la mitigación frente al cambio climático: experiencia de Manabí, Ecuador
E18	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)	Incentivos financieros para impulsar soluciones basada en la naturaleza en LAC
E19	Unión Europea	La participación de los jóvenes en la agenda climática: Voces de Europa, América Latina y el Caribe
E20	Delegación de la Unión Europea en Chile	La ruta global hacia la competitividad del hidrógeno verde
E21	FIIAPP, GIZ, ONU Medio Ambiente y CEPAL	Estrategias Climáticas de Largo Plazo: Experiencias y perspectivas en América Latina
E22	EUROCLIMA+ y FIIAPP	Avances en la implementación del principio de inclusividad del Acuerdo de París en América Latina
E23	International Secretariat for Water	Retos y contribuciones de indígenas de América Latina frente al cambio climático
E24	Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas	Las Redes de Investigación y Educación al servicio de la Acción Climática: Impactos de la Infraestructura Digital académica en las políticas climáticas
E25	Centro Alexander von Humboldt, AECID y AFD	La inclusión social de las comunidades indígenas y rurales para el éxito de las políticas de cambio climático y la adaptación al cambio climático
E26	Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Federación Nativa del río madre de Dios y Afluentes, Fundación Plurales y Biosfera – Investigación de Futuros	Protección de los ecosistemas desde los enfoques de justicia climática, género y grupos vulnerables
E27	EUROCLIMA+ (GIZ) and NDC Partnership Support Unit	¿Cómo hacer funcionar la recuperación verde? Experiencias desde América Latina y el Caribe y el rol de las cooperaciones internacionales
E28	Climate Group, Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y ANAMMA Brasil	Las redes de gobiernos locales abordan la pérdida de biodiversidad y el cambio climático
E29	Global Climate and Health Alliance	NDC saludable en América Latina y el Caribe
E30	Wildlife Conservation Society	5 Grandes Bosques de Mesoamérica: Una Iniciativa Regional Para El Clima, La Biodiversidad y La Gente

E31	GCoM Americas y ICLEI América del Sur	Acelerando y financiando la implementación de los Planes de Acción Climática de municipios en América Latina
E32	Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático	Transformar los sistemas alimentarios para acelerar la neutralidad de carbono
E33	Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica	Casos de éxito en la integración vertical entre lo local y lo nacional durante procesos de planificación de la adaptación en LATAM y Caribe
E34	Centro Brasil no Clima	Gobernadores por el clima: los estados brasileños lideran la implementación de las NDC
E35	Humboldt Chancellor Fellow	Poderes legislativos y cambio climático: ¿Cómo impulsar el debate sobre la transición justa en los parlamentos?
E36	CEPAL, Senado Federal de Brasil y Senado Nacional de Argentina	Parlamentos Latinoamericanos y Caribeños Protagonistas: Anuncio del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa
E37	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)	¿Es posible lograr la carbono neutralidad del sector AFOLU en Argentina? Aportes sobre modelado y percepciones de actores
E38	Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia	CONSERV: movilización de financiamiento para fomentar la conservación y la producción agrícola en las fincas amazónicas
E39	Comisión Centroamericana Ambiente y Desarrollo	Construyendo Resiliencia en Centroamérica
E40	GIZ	Escalando las Soluciones basadas en la Naturaleza en las políticas públicas de América Latina y el Caribe
E41	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, ICCO COOPERATION y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala	Financiamiento climático a nivel local y su articulación con las políticas públicas en Latinoamérica: Experiencias construidas a partir de casos exitosos de proyectos en los sectores PRA y BBE
E42	Ashoka	Co-creando Laboratorios de Acción Climática en instituciones de educación superior en Latinoamérica basados en comunidades
E43	PNUMA	MoveToZero: América Latina y el Caribe, la mejor historia no contada en movilidad eléctrica
E44	Expertise France, CATIE y GIZ	América Latina busca financiamiento para la transformación resiliente al clima de su sector agropecuario
E45	SLOCAT Partnership	Acción climática en el sector de transporte y movilidad urbana
E46	CEPAL	Ambición climática: los nuevos compromisos nacionales en América Latina y el Caribe
E47	GIZ	La integración de la biodiversidad como herramienta para hacerle frente al cambio climático
E48	SLOCAT, EUROCLIMA+, GIZ (NDC-TIA, TraCS, Moving Chile), Mobilise Your City	Apoyar a la cooperación multinivel para la implementación de estrategias de transporte en los NDC

Anexo II.

EN CIFRAS: Estadísticas del Pabellón EUROCLIMA+ en la COP26

44 eventos

37 eventos híbridos, **7** eventos exclusivamente en línea

402 presentaciones

335 intervinientes

40 intervinientes de alto nivel

249 organizaciones

42 países

+700 personas de público presencial

+15K personas vieron los videos en línea



Equipo responsable del Pabellón EUROCLIMA+

Índice por países:

Argentina	7, 9, 18, 19, 20, 22, 23, 34, 47, 50, 52, 56, 64
Bolivia	44, 49, 57
Brasil	9, 17, 18, 20, 29, 30, 32, 38, 46, 47, 58, 62, 64, 65
Chile	vi, vii, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 49, 56, 57, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 72
Colombia	3, 4, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 35, 43, 44, 47, 48, 48, 55, 58, 59, 60, 62, 72
Costa Rica	2, 3, 5, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 35, 43, 46, 48, 49, 56, 60, 70
Ecuador	30, 31, 35, 39, 48, 60, 63
España	63, 64, 66, 71
El Salvador	6, 43
Guatemala	3, 5, 7, 12, 22, 43, 47, 48
Honduras	xii, 4, 5, 6, 12, 22, 43, 46, 47, 48
México	3, 17, 20, 21, 23, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52
Nicaragua	22, 59
Panamá	4, 6, 12, 17, 22, 23, 24, 49
Paraguay	7, 8, 12, 58
Perú	7, 21, 22, 23, 24, 44, 57, 58
Reino Unido	64, 69
República Dominicana	5, 22, 30
Uruguay	3, 4, 35, 56

Índice por herramientas citadas en el estudio temático:

Presupuestos de carbono	2, 15, 28, 35
Ley de cambio climático	3, 4, 11, 12
Gobernanza multinivel	5, 11, 29, 30
Descentralización de la toma de decisiones	5, 31, 37
Sistema de alerta	6, 59, 62
Guía de inversiones	17, 24, 56
Mapa nacional de riesgos	17, 23, 24, 63, 66
Instrumentos de mercado	17, 21, 23, 28
Impuestos al carbono	20, 21, 23, 24
Precio social al carbono	21, 22, 23, 24
Taxonomías verdes	17, 18, 24
Hojas de ruta sectoriales	15, 18, 19, 23, 24, 50
Acuerdos voluntarios	19, 24, 46, 47, 58
Acuerdos comerciales	18, 19, 20
Transferencia tecnológica	2, 18, 19, 20, 23
Energías renovables	x, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 20, 28, 35, 38
Perspectiva social integral	28
Innovación en la gobernanza	37, 52
Participación ciudadana	55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 70, 72
Soluciones basadas en la naturaleza	x, 16, 32, 33, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51
Agricultura urbana	32
Manual de lineamientos urbanos	33
Digitalización	34
Movilidad eléctrica	7, 11, 34, 37
Estrategias climáticas de largo plazo	1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 19, 23, 32, 70
Laboratorios de acción climática	62, 63
Visores de información climática	63, 65



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea



ISBN: 978-92-76-53661-1